**ACUERDO IMPEPAC/CEE/325/2026, QUE PRESENTA LA SECRETARÍA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA RESPUESTA AL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, RESPECTO DE LA SOLICITUD REALIZADA MEDIANTE ACUERDO PARLAMENTARIO IDENTIFICADO CON EL ALFANUMÉRICO ACUERDO/100/SSLyP/DPyTL/Año3/P.O.1/26, CON RELACIÓN A LA CELEBRACIÓN DE LAS CONSULTAS PREVIAS EN CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD 71/2021 Y 111/2022 Y SU ACUMULADO 112/2022, ASÍ COMO DE LA VINCULACIÓN REALIZADA POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN AUTOS DE LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 71/2021 DE FECHA VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTISÉIS.**

## GLOSARIO

| | |
|---|---|
| Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana | IMPEPAC |
| Suprema Corte de Justicia de la Nación | Suprema Corte |
| Congreso del Estado de Morelos | Congreso |
| Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Morelos | Ley de Participación |

## ANTECEDENTES

**1. DESIGNACIONES Y TOMAS DE PROTESTA PARA INTEGRAR EL CEE DEL IMPEPAC.** A partir de los procesos de selección y designación realizados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), el órgano superior de dirección del IMPEPAC se ha integrado conforme a los acuerdos INE/CG293/2020, INE/CG374/2021 e INE/CG2243/2024. En cumplimiento a los resolutivos de dichos instrumentos, las y los consejeros designados rindieron la protesta de ley en las fechas correspondientes, quedando conformada la actual integración de la siguiente manera:

| Acuerdo INE / Fecha de Emisión | Fecha de toma de protesta | Nombre de la Consejería | Cargo | Periodo: |
|---|---|---|---|---|
| | 01 de octubre de 2020 | Pedro Gregorio Alvarado Ramos | Consejero Electoral | 7 años |

| Acuerdo INE / Fecha de Emisión | Fecha de toma de protesta | Nombre de la Consejería | Cargo | Periodo: |
|---|---|---|---|---|
| INE/CG293/2020 30 de septiembre de 2020 | | Elizabeth Martínez Gutiérrez | Consejera Electoral | 7 años |
| INE/CG374/2021 16 de abril de 2021 | 17 de abril de 2021 | Mireya Gally Jordá | Consejera Presidenta | 7 años |
| | | Mayte Casalez Campos | Consejera Electoral | Para concluir el encargo al 23 de agosto de 2027 |
| INE/CG2243/2024 26 de septiembre de 2024 | 01 de octubre de 2024 | María del Rosario Montes Álvarez | Consejera Electoral | 7 años |
| | | Adrián Montessoro Castillo | Consejero Electoral | 7 años |
| | | Víctor Manuel Salgado Martínez | Consejero Electoral | 7 años |

**2. RESOLUCIÓN DE ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 71/2021.** Con fecha siete de junio del dos mil veintidós, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dictó resolución dentro del expediente referido, en la que se determinó lo siguiente:

> [...]
>
> **IX. PUNTOS RESOLUTIVOS.**
>
> **122.** Por lo expuesto y fundado se resuelve:
>
> **PRIMERO**. Es **procedente** y **fundada** la acción de inconstitucionalidad.
>
> **SEGUNDO.** Se declara la **invalidez** de los artículos 43, 65, 74, del 78 al 84,95 y 96 de la Ley de Educación del Estado de Morelos, publicada en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, de conformidad con el **apartado VII** de esta decisión.
>
> **TERCERO**. La declaratoria de invalidez decretada surtirá sus efectos a los **doce meses** siguientes a la notificación de estos puntos resolutivos al Congreso del Estado de Morelos, en la inteligencia de que, dentro del referido plazo, previo desarrollo de

las respectivas consultas indígena y afromexicana, así como a las personas con discapacidad, ese Congreso deberá legislar en los términos precisados en los **apartados VII** y **VIII** de este fallo.

**CUARTO**. **Publíquese** esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del Estado de Morelos, así como en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.

[...]

**3. RESOLUCIÓN DE ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 111/2022 Y SU ACUMULADO 112/2022**. En fecha dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dictó resolución dentro del expediente referido, en la que se determinó lo siguiente:

[...]

**VIII. DECISIÓN.**

Por lo antes expuesto, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve:

**PRIMERO.** Es procedente y fundada la presente acción de inconstitucionalidad y su acumulada.

**SEGUNDO**. Se declara la invalidez de los artículos 12, en su porción normativa "pertenezca a un municipio o comunidad indígena u originario, afromexicana o", y 13 de la Ley para la Declaración Especial de Ausencia de Personas Desaparecidas en el Estado de Morelos, expedida mediante Decreto Número Trescientos Cincuenta y Siete, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el seis de julio de dos mil veintidós, por los motivos expuestos en el apartado VI de esta decisión.

**TERCERO**. La declaratoria de invalidez decretada surtirá sus efectos a los doce meses siguientes a la notificación de estos puntos resolutivos al Congreso del Estado de Morelos, en la inteligencia de que, dentro del referido plazo, previo desarrollo de las respectivas consultas a las personas con discapacidad, así como a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, ese Congreso deberá legislar en los términos precisados en el apartado VII de esta sentencia.

**CUARTO**. Publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del Estado de Morelos, así como en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.

[...]

**4. PUBLICACIÓN DE LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA EL ESTADO DE MORELOS.** Con fecha doce de noviembre de dos mil veinticinco, se publicó la Ley de **Participación** Ciudadana para el Estado de Morelos, en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" **NÚMERO 6489** de fecha 12 de noviembre del dos mil veinticinco.

**5. REQUERIMIENTO DE LA SUPREMA CORTE PARA REALIZAR LA CONSULTA PREVIA.** Con fecha trece de agosto de dos mil veintiséis, el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia emitió un acuerdo de requerimiento en la Acción de Inconstitucionalidad 111/2022 y su acumulada 112/2022.

**6. APROBACIÓN DEL CALENDARIO ELECTORAL 2026-2027** Con fecha veintisiete de agosto de dos mil veintiséis, el Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, aprobó mediante acuerdo IMPEPAC/CEE/260/2026, el Calendario de actividades a desarrollar durante el Proceso Electoral Local Concurrente del estado de Morelos 2026-2027.

**7. DECLARACIÓN DE INICIO DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2026-2027.** El primero de septiembre de dos mil veintiséis, en Sesión solemne del Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, se estableció el inicio formal del Proceso Electoral Concurrente Local 2026-2027, por el que se elegirán los cargos los Diputados miembros del Congreso del Estado, así como de los integrantes de los Ayuntamientos del estado de Morelos.

**8. NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO PARLAMENTARIO IDENTIFICADO CON EL ALFANUMÉRICO ACUERDO/100/SSLyP/DPyTL/Año3/P.O.1/26.** En fecha diez de septiembre de dos mil veintiséis, se recibió en la oficialía de partes de este Instituto Electoral Local, escrito signado por el Mtro. César Francisco Betancourt López, en su calidad de Secretario de Servicios Legislativos y Parlamentarios del Congreso del Estado de Morelos, mediante el cual se hizo del conocimiento a la Consejera Presidenta, de la emisión del acuerdo identificado con el alfanumérico **ACUERDO/100/SSLyP/DPyTL/Año3/P.O.1/26.**

**9. VINCULACIÓN.** Con fecha veintiocho de septiembre de dos mil veintiséis, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en autos de la acción de inconstitucionalidad 71/2021, determinó vincular a este IMPEPAC, al cumplimiento de la ejecutoria del expediente de mérito, en los términos siguientes:

> [...]
> **II. Vinculación.**
>
> Derivado de lo informado por el delegado de dicho Congreso estatal y toda vez que las sentencias dictadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación son de orden público y su cumplimiento constituye una obligación para las autoridades que conforme a su cumplimiento constituye una obligación para las autoridades que conforme a sus atribuciones tengan intervención en los actos encaminados a su ejecución, **se vincula al cumplimiento de la ejecutoria al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana del Estado de Morelos**, para que dentro del ámbito de sus atribuciones, en la plazo de **diez días hábiles**, informe las acciones que haya realizado o se encuentre realizando que guarden relación con el cumplimiento de la ejecutoria, **relativo al desarrollo de las consultas a los pueblos y comunidades**

**indígenas y afromexicanas, así como de las personas con discapacidad.**
[...]

## CONSIDERANDOS

**I. COMPETENCIA.** De conformidad con lo establecido por el artículo 41, segundo párrafo, base V, apartado A, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la organización de las elecciones es una función exclusiva del Instituto Nacional Electoral y de los Organismos Públicos Locales, en esas circunstancias la organización de las elecciones debe regirse bajo la función de los principios rectores de la materia, a saber; los de constitucionalidad, certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad, equidad, definitividad, profesionalismo y paridad de género.

De conformidad con el artículo 23, párrafo séptimo, fracción V, de la Constitución para el Estado Libre y Soberano de Morelos, la organización de las elecciones es una función estatal que le corresponde a este Organismo Público Local, en términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tales circunstancias, la Constitución Local dispone que el Instituto Local es un Organismo Público Local Electoral Autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, en cuya integración concurren los partidos políticos y la ciudadanía, en términos de la normativa aplicable. Será autoridad en la materia electoral y **de participación ciudadana,** profesional en su desempeño, autónomo en su funcionamiento e independiente en sus decisiones, conforme lo determine la normativa aplicable, se estructurará con órganos de dirección, ejecutivos y técnicos.

Por su parte, el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, establece en su ordinal 63, párrafo tercero que el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, tendrá a su cargo la preparación, desarrollo y conclusión de los Procesos Electorales Locales ordinarios y extraordinarios, **así como los de participación ciudadana** a que se convoquen, según sea el caso, de acuerdo a los términos previstos por la normativa aplicable.

**II. FINES DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.** En términos del artículo 65 del Código Electoral vigente son fines del Instituto Morelense; contribuir al desarrollo de la vida democrática y coadyuvar en la promoción y difusión de la cultura política; consolidar el régimen de partidos políticos; garantizar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones; asegurar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar a los integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo y de los ayuntamientos del Estado y, **en su caso, los procesos de participación ciudadana; así como promover la participación ciudadana en la emisión del sufragio y velar por la autenticidad y efectividad del mismo.**

Así mismo, el numeral 66, fracción V del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, establece como una de las funciones del

Instituto Morelense, la de orientar a los ciudadanos en la Entidad para el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus obligaciones político-electorales.

**III. INTEGRACIÓN DEL INSTITUTO.** De igual forma, el numeral 69 del Código Electoral local estipula que el Instituto Morelense ejercerá sus funciones en toda la entidad y se integra con los siguientes órganos electorales:

**I. El Consejo Estatal Electoral;**
II. Las Comisiones Ejecutivas Permanentes y Temporales;
III. Los Consejos Distritales Electorales;
IV. Los Consejos Municipales Electorales;
V. Las Mesas Directivas de Casilla, y
VI. Los demás organismos que la normativa y este Código señale.

**IV. ÓRGANO DE DIRECCIÓN SUPERIOR Y DELIBERACIÓN.** De conformidad con el artículo 71, del Código Electoral vigente establece que el Consejo Estatal es el órgano de Dirección superior y deliberación del Instituto Morelense y responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral.

Asimismo, el ordinal 78, fracciones I, III, XLV y LVI, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, establece las atribuciones del Consejo Estatal Electoral, respecto de llevar a cabo la preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales y los procesos de Participación Ciudadana; expidiendo los Reglamentos y Lineamientos necesarios para el cumplimiento de sus atribuciones; dictando todas las resoluciones que sean necesarias para hacer efectivas las disposiciones normativas en el ámbito de su competencia y las demás que le confiere el propio Código y otras disposiciones legales.

**V. DEL MECANISMO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DENOMINADO CONSULTA CIUDADANA.** Para el análisis y desarrollo de la solicitud planteada por el Congreso, es preciso mencionar el fundamento relacionado con el mecanismo de Participación Ciudadana denominado Consulta ciudadana, previo a ello, es preciso aclarar que el **artículo 23** de la Constitución Política del estado Libre y Soberano de Morelos, establece que el **IMPEPAC**, será autoridad en materia electoral **y de participación ciudadana**, ahora bien, la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Morelos, en su capítulo IV, artículos 69,70,71,72,73,74,75,76,77 y 78 establecen lo siguiente:

[...]

**CAPÍTULO IV**
**CONSULTA CIUDADANA**

**Artículo 69.** La Consulta Ciudadana es el mecanismo a través del cual el Ejecutivo del Estado, los Ayuntamientos, el Congreso del Estado, por sí o en colaboración, someten a consideración de la ciudadanía cualquier tema de impacto trascendental y territorial

en el estado de Morelos.

**Artículo 70.** La Consulta Ciudadana podrá ser dirigida a:

I. La ciudadanía del estado de Morelos;
II. La ciudadanía de uno o varios Municipios;
III. La ciudadanía de una o varias colonias o poblados, y
IV. La sociedad en cualquiera de los ámbitos territoriales antes mencionados, organizados por su actividad económica, profesional u otra razón (sectores sindicales, cooperativista, ejidal, comunal, agrario, agrícola, productivo, industrial, comercial, prestación de servicios, etcétera).

**Artículo 71.** La Consulta Ciudadana podrá ser convocada por la persona titular del Poder Ejecutivo, el Congreso del Estado y los titulares de las Presidencias Municipales, de manera individual o conjunta, señalando de forma clara y precisa la naturaleza del acto materia de consulta a la ciudadanía.

El Instituto coordinará la organización, desarrollo, cómputo y difusión de los resultados de la consulta ciudadana.

**Artículo 72.** No se someterán a Consulta Ciudadana disposiciones de carácter tributaria o fiscal, electoral, penal y que contravengan los derechos humanos.

**Artículo 73.** La convocatoria de Consulta Ciudadana deberá expedirse por la autoridad, o autoridades convocantes por lo menos quince días hábiles previos a la fecha de realización y deberá difundirse en los lugares de mayor afluencia de habitantes de la demarcación territorial correspondiente y en medios electrónicos.

La convocatoria deberá contener por lo menos:

I. La autoridad, o en su caso, las autoridades que convocan a Consulta Ciudadana.
II. La descripción específica del acto materia de la consulta u omisiones de las autoridades estatales y municipales materia de la consulta;
III. El ámbito de aplicación territorial de la consulta;
IV. La exposición de motivos, razones y fundamento por el cual lo que se propone someter a consulta ciudadana se considera de importancia por interés general y trascendental para la vida pública de la demarcación territorial;
V. Fecha, horario y lugares donde podrá participar la ciudadanía, y
VI. El método o instrumento mediante el cual se implementará la consulta ciudadana.

**Artículo 74.** En los procesos de consulta ciudadana solo podrá participar la ciudadanía de la circunscripción estatal o municipal correspondiente al ámbito de aplicación de la consulta, y que cuenten con credencial para votar vigente.

Los resultados de la votación de la consulta ciudadana se publicarán en los sitios de internet oficiales, y medios electrónicos de difusión del Instituto, del Poder Ejecutivo Estatal, del Poder Legislativo o de los Ayuntamientos, y a su vez, según corresponda, en el Periódico Oficial, la Gaceta Municipal y en los periódicos de mayor circulación en el Estado.

**Artículo 75.** Los resultados de la Consulta Ciudadana serán elementos de juicio para el ejercicio de las funciones de la autoridad, o en su caso, las autoridades convocantes.

La autoridad, o autoridades convocantes deberán informar, a más tardar noventa días posteriores a la publicación de los resultados, acerca del sentido en que el ejercicio de sus funciones fue afectado por los resultados de esta.

En el caso de que el ejercicio de las funciones de la autoridad no corresponda a la opinión expresada por los participantes en la consulta ciudadana, la autoridad deberá expresar con claridad la motivación y fundamentación de sus decisiones.

Lo anterior podrá hacerse por medio del Periódico Oficial, los diarios de mayor circulación del Estado, los medios de comunicación masiva, los medios electrónicos oficiales de la autoridad convocante u otros mecanismos.

**Artículo 76.** Ningún servidor público en el ejercicio de sus funciones podrá intervenir en el proceso de Consulta Ciudadana y únicamente podrá hacerlo con el carácter de ciudadano en ejercicio de sus derechos políticos y electorales, así como quienes tengan a su cargo la preparación, desarrollo y vigilancia de esta.

En caso contrario, se aplicará lo dispuesto en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Morelos, el Código Electoral y el Código Penal.

**Artículo 77.** La Consulta Ciudadana podrá realizarse hasta noventa días naturales previos a la fecha en que inicien los procesos electorales locales.

**Artículo 78.** Las controversias que se generen en cualquiera de las etapas de la Consulta Ciudadana serán resueltas por el Tribunal Electoral del Estado de Morelos, de conformidad con las reglas previstas en la legislación electoral del Estado de Morelos.
[...]

**VI. DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.** La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 1, establece lo siguiente:

[...]
**Artículo 1o.** En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta

> Constitución **y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte**, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.
>
> Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución **y con los tratados internacionales de la materia** favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.
>
> Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y **garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad**. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.
>
> Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.
>
> Queda prohibida toda discriminación por origen étnico o nacional, el género, la edad, **las discapacidades**, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
>
> *[…]*
> El énfasis es propio.

De dicho dispositivo, se desprende como mandato constitucional que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, en ese sentido, resulta importante analizar lo establecido en la **Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad**[1], el cual establece en su artículo 1, que el propósito de la Convención es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por **todas las personas con discapacidad,** y promover el respeto de su dignidad inherente, así mismo menciona que, las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, e igualdad de condiciones con las demás, aunado a ello, en su artículo 4, respecto de las obligaciones generales, en el numeral 3, establece lo siguiente:

> […]
>
> 3. En la elaboración y aplicación de legislación y políticas para hacer efectiva la presente Convención, y en otros procesos de

[1] En adelante Convención de Personas con Discapacidad.

> adopción de **decisiones sobre cuestiones relacionadas con las personas con discapacidad,** los Estados partes **celebrarán consultas estrechas y colaborarán activamente con las personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas con discapacidad, a través de las organizaciones que las representan.**
>
> [...]

Asimismo, la observación general número 7 (2018) sobre la participación de las personas con discapacidad incluidos los niños y las niñas con discapacidad, a través de las organizaciones que las representan en la aplicación y el seguimiento de la Convención, emitida por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, establece entre muchas cuestiones muy relevantes, el alcance del artículo 4, párrafo 3 de la Convención multicitada, la cual menciona que a fin de cumplir las obligaciones dimanantes del artículo 4, párrafo 3, los Estados partes **deberían incluir la obligación de celebrar consultas estrechas e integrar activamente a personas con discapacidad**, a través de sus propias organizaciones, en los marcos jurídicos y reglamentarios y los procedimientos en todos los niveles y sectores del Gobierno, así mismo menciona que, los Estados partes deberían considerar las consultas y la integración de las personas con discapacidad como medida obligatoria antes de aprobar leyes, reglamentos y políticas, ya sean de carácter general o relativos a la discapacidad, Por lo tanto, las consultas deberían comenzar en las fases iniciales y contribuir al resultado final en todos los procesos de adopción de decisiones, de igual manera, considera que las consultas deberían comprender a las organizaciones que representan a la amplia diversidad de personas con discapacidad a nivel local, nacional y regional e internacional.

Por otra parte, menciona a qué se refiere la expresión **"cuestiones relacionadas con las personas con discapacidad",** indicando que abarca toda la gama de medidas legislativas, administrativas y de otra índoles que puedan afectar de forma directa o indirecta a los derechos de las personas con discapacidad, también refiere que la interpretación más amplia de las cuestiones relacionadas con las personas con discapacidad permite a los Estados parte tener en cuenta la discapacidad mediante políticas inclusivas, garantizando que las personas con discapacidad sean consideradas en igualdad de condiciones con las demás, también asegura que el conocimiento y las experiencias vitales de las personas con discapacidad se tengan en consideración al decidir nuevas medidas legislativas, administrativas o de otro tipo. Ello comprende los procesos de adopción de decisiones, como las leyes generales y los presupuestos públicos, y las leyes específicas sobre la discapacidad, que podrían afectar la vida de las personas.

Además, refiere que la **"celebración de consultas estrechas y la colaboración activa"** con las personas con discapacidad a través de las organizaciones que las representan es una obligación dimanante del derecho internacional de los derechos humanos que exige el reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas para participar en los procesos de adopción de decisiones sobre la base de su autonomía personal y libre determinación. La consulta y colaboración en los procesos de adopción de decisiones para aplicar la Convención, así como en

otros procesos de adopción de decisiones, deberían incluir a todas las personas con discapacidad y, cuando sea necesario, regímenes de apoyo para la adopción de decisiones.

Otro elemento importante, considerado por el Comité es la **"participación plena y efectiva"** en la sociedad, mencionando que se refiere a la colaboración con todas las personas, incluidas las personas con discapacidad, a fin de que sientan que pertenecen a la sociedad y forman parte de ella. Comprende alentarles y proporcionarles el apoyo adecuado, entre otras cosas apoyo de sus pares y apoyo para participar en la sociedad, así como no estigmatizarlas y hacer que se sientan seguras y respetadas cuando hablen en público. La participación plena y efectiva requiere que los Estados partes faciliten la participación y consulta de personas con discapacidad que representen a la amplia diversidad de deficiencias, por lo tanto, los Estados partes deberían asegurar la participación plena y efectiva de las personas con discapacidad, a través de las organizaciones que las representan, como medida para alcanzar su inclusión en la sociedad y combatir la discriminación de que son objeto.

Finalmente, el artículo 2 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (LGIPD) define, en su fracción II, los ajustes razonables como las modificaciones y adaptaciones necesarias que, sin imponer una carga desproporcionada, garantizan a las personas con discapacidad el ejercicio de sus derechos en igualdad de condiciones; asimismo, la fracción XIV establece que la discriminación por motivos de discapacidad comprende cualquier exclusión o restricción que obstaculice dicho ejercicio, precisando que la denegación de los ajustes razonables constituye, por sí misma, una forma de discriminación. La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación prohíbe toda distinción que impida el acceso a derechos y la participación política.

**VII. DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS.** La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo **1, párrafo tercero**, establece lo siguiente:

> [...]
>
> Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y **garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad**. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.
>
> *[...]*
> El énfasis es propio.

Asimismo **el artículo 2, inciso a) fracción XIII** de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos determina que esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para:

> *[…]*
> *XIII. Ser consultados sobre las medidas legislativas o administrativas que se pretendan adoptar, cuando estas puedan causar afectaciones o impactos significativos en su vida o entorno, con la finalidad de obtener su consentimiento o, en su caso, llegar a un acuerdo sobre tales medidas.*
>
> *[…]*

Ahora bien el artículo 18 y 19 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, así como el artículo 23 numeral 2 de la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas establecen:

> *[…]*
> ***Artículo 18.*** *Los pueblos indígenas tienen derecho a* ***participar en la adopción de decisiones*** *en las cuestiones que* ***afecten a sus derechos****, por conducto de representantes elegidos por ellos de conformidad con sus propios procedimientos, así como a mantener y desarrollar sus propias instituciones de adopción de decisiones.*
>
> ***Artículo 19****. Los Estados* ***celebrarán consultas y cooperarán de buena fe*** *con los pueblos indígenas interesados por medio de sus instituciones representativas* ***antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten****, a fin de* ***obtener su consentimiento libre, previo e informado.***
>
> ***Artículo XXIII.*** *Participación de los pueblos indígenas y aportes de los sistemas legales y organizativos indígenas:*
>
> *Los Estados* ***celebrarán consultas y cooperarán de buena fe*** *con los pueblos indígenas interesados por medio de sus instituciones representativas* ***antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten****, a fin de* ***obtener su consentimiento libre, previo e informado.***
>
> *[…]*

El artículo 6° del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, establece que:

> […]
> 1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán:
>
> a) **consultar a los pueblos interesados,** mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente;
> b) **establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente**, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que les conciernan;

c) establecer los medios para el pleno desarrollo de las iniciativas de esos pueblos, y el los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios para este fin.

2. Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o logar el consentimiento acerca de las medidas propuestas.

[...]

En ese sentido es que los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por medio de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten, a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado.

**VIII. DE LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 71/2021.** La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, promovió acción de inconstitucionalidad en contra de los artículos 43, 65 y 74, el CAPÍTULO VII, denominado "DE LA EDUCACIÓN INDÍGENA" con sus artículos 78 al 84, así como diverso CAPÍTULO X, denominado de la "EDUCACIÓN INCLUSIVA" con sus artículos 95 y 96 contenidos en el TÍTULO CUARTO "DE LA EDUCACIÓN BÁSICA QUE SE IMPARTE EN EL ESTADO" de la Ley de Educación del Estado de Morelos, publicada en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", Órgano de Difusión Oficial del Estado Libre y Soberano de Morelos, en su edición número 5926, de fecha diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, misma que fue resuelta con fecha **siete de junio del dos mil veintidós**, cuyos conceptos de invalidez radicaron en lo siguiente:

[...]

**2.1 Los artículos impugnados, violan el derecho de consulta previa de las comunidades indígenas:** La CDEHM alegó que los preceptos impugnados, al ser susceptibles de afectar los derechos de las comunidades indígenas en esa entidad federativa debieron ser consultados, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 2, 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante, "la Constitución General"); | 13, fracción II, inciso a), y 25 de la Ley de Fomento y Desarrollo de los Derechos y Cultura de las Comunidades y Pueblos Indígenas del Estado de Morelos; 6, fracción I, inciso a) y fracción II, del Convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes (en adelante, "el Convenio 169"); y, 18 y 19 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Sostuvo que los titulares de los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Morelos tenían la obligación de realizar consultas libres, de buena fe e informadas a las comunidades, pueblos y municipios indígenas, cuando las normas afecten sus derechos y con la finalidad de que este grupo vulnerable de la sociedad pueda participar activamente en la construcción del contenido normativo, así como su aprobación.

> Al respecto, arguyó que, si bien con las normas impugnadas se busca reconocer y establecer derechos de las comunidades y pueblos indígenas respecto de la educación que sus integrantes deben recibir, lo cierto es que dichas normas y su contenido no fueron puestos a consulta de las comunidades, pueblos y municipios indígenas del Estado de Morelos, lo cual se advierte del procedimiento legislativo, ya que ni el Poder Legislativo ni el Poder Ejecutivo cumplieron con dicha obligación.
>
> **2.2 Los artículos impugnados violan el derecho de previa consulta a las personas con discapacidad.** Señaló que, si bien las normas impugnadas buscan garantizar la educación y la atención de las personas con discapacidad, con la finalidad de que se reduzcan aquellas limitaciones, barreras u otros impedimentos que hagan nugatorio el ejercicio de ese derecho de forma plena e incluyente, y de eliminar las prácticas de discriminación o exclusión motivadas por esa condición, era necesario realizar una consulta y que dichas personas participaran conforme al punto 3 del artículo 4 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (en adelante, "la Convención de Personas con Discapacidad"), al dirigirse las normas impugnadas a éstas e impactar en sus derechos. Por lo tanto, al no haberse observado las reglas convencionales, las normas resultan incompatibles con el parámetro de regularidad constitucional en materia de derechos humanos.
> [...]

Con relación a dichos conceptos de invalidez, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció dentro del parámetro de regularidad constitucional de la consultas con personas con discapacidad entre otras cosas que:

> [...]
>
> ...como elementos mínimos para cumplir con la obligación establecida en el artículo 4.3 de la Convención de Personas con Discapacidad, relativa a que las personas con discapacidad sean consultadas, su participación debe ser:
>
> - **Previa, pública, abierta y regular.** El órgano legislativo debe establecer reglas, plazos razonables y procedimientos en una convocatoria, en la que se informe de manera amplia, accesible y por distintos medios la manera en que las personas con discapacidad y las organizaciones que las representan podrán participar tanto en el proyecto de iniciativa, como en el proceso legislativo, dentro del cual se debe garantizar su participación, de manera previa al dictamen y ante el Pleno del órgano deliberativo, durante la discusión, por lo cual deben especificarse en la convocatorias los momentos de participación.
> - **Estrecha y con participación preferentemente directa de las personas con discapacidad.** Las personas con discapacidad no deben ser representadas, sino que, en todo caso, cuenten con la asesoría necesaria para

participar sin que se sustituya su voluntad, es decir, que puedan hacerlo tanto de forma individual, como por conducto de las organizaciones de personas con discapacidad, además, de que también se tome en cuenta a las niñas y niños con discapacidad, así como a las organizaciones que los representan.

- **Accesible.** Las convocatorias deben realizarse con lenguaje comprensible, en formato de lectura fácil y lenguaje claro, así como adaptadas para ser entendible de acuerdo con las necesidades por el tipo de discapacidad, por distintos medios, incluidos los sitios web de los órganos legislativos, mediante formatos digitales accesibles y ajustes razonables cuando se requiera, como por ejemplo, los macrotipos, la interpretación en lengua de señas, el braille y la comunicación táctil. Además, de que las instalaciones de los órganos parlamentarios deben ser accesibles a las personas con discapacidad.

  Aunado a ello, el órgano legislativo debe garantizar que la iniciativa, los dictámenes correspondientes y los debates ante el Pleno del órgano legislativo se realicen con este mismo formato, a efecto de que se posibilite que las personas con discapacidad comprendan el contenido de la iniciativa y se tome en cuenta su opinión, dando la posibilidad de proponer cambios tanto a ésta como durante el proceso legislativo.

  La accesibilidad también debe garantizarse respecto del producto del procedimiento legislativo, es decir, el decreto por el que se publique el ordenamiento jurídico en el órgano de difusión estatal.

- **Informada.** A las personas con discapacidad o comunidades involucradas se les debe informar de manera amplia y precisa sobre la naturaleza y consecuencia de la decisión que se pretende tomar.
- **Significativa.** Lo cual implica que en los referidos momentos del proceso legislativo se debata o se analicen las conclusiones obtenidas de la participación de las personas con discapacidad y los organismos que las representan.
- **Con participación efectiva.** Que abone a la participación eficaz de las personas con discapacidad, las organizaciones y autoridades que los representan, en donde realmente se tome en cuenta su opinión y se analice, con el propósito de que no se reduzca su intervención a hacerlos partícipes de una mera exposición, sino que enriquezcan con su visión la manera en que el Estado puede hacer real la eliminación de barreras sociales para lograr su pleno desarrollo en las mejores condiciones, principalmente, porque son quienes se enfrentan y pueden hacer notar las barreras sociales con las que se encuentran, a efecto de que puedan diseñar mejores políticas para garantizar el pleno ejercicio

de sus derechos fundamentales en igualdad de condiciones, no obstante el estado físico, psicológico o intelectual que presenten en razón de su discapacidad, así como por su género, minoría de edad, y con una cosmovisión amplia de condiciones y dificultades sociales como las condiciones de pobreza, de vivienda, salud, educación, laborales, etcétera.

- **Transparente.** Para lograr una participación eficaz es elemental garantizar la transparencia de la información que generen los órganos estatales, la que aporten las personas con discapacidad y las organizaciones que las representen, así como del análisis y debate de sus aportaciones.

[...]

Con relación al parámetro de regularidad constitucional de las consultas previas a comunidades indígenas y afromexicanas y sus miembros, entre otras cosas mencionó que:

[...]
...los procedimientos de consulta deben preservar las especificidades culturales y atender a las particularidades de cada caso según el objeto de la consulta. Si bien deben ser flexibles, lo cierto es que deben prever necesariamente algunas fases que –concatenadas- impliquen la observancia del derecho a la consulta y la materialización de los principios mínimos de ser previa, libre, informada, de buena fe, con la finalidad de llegar a un acuerdo y culturalmente adecuada, observando, como mínimo, las siguientes características y fases:

- **Fase preconsultiva** que permita la identificación de la medida legislativa que debe ser objeto de consulta, la identificación de los pueblos y comunidades indígenas a ser consultados, así como la determinación de la forma de llevar a cabo el proceso, la forma de intervención y la formalización de acuerdos lo cual se deberá definir de común acuerdo entre las autoridades gubernamentales y representantes de las comunidades indígenas.
- **Fase informativa** de entrega de información y difusión del proceso de consulta, con la finalidad de contar con la información completa, previa y significativa sobre las medidas legislativas. Ello puede incluir, por ejemplo, la entrega por parte de las autoridades de un análisis y evaluación apropiada de las repercusiones de las medidas legislativas.
- **Fase de deliberación interna.** En esta etapa –que resulta fundamental- los pueblos y comunidades indígenas, a través del diálogo y acuerdos, evalúan internamente la medida que les afectaría directamente.

- **Fase de diálogo** entre los representantes del Estado y representantes de los pueblos indígenas con la finalidad de generar acuerdos.
- **Fase de decisión**, comunicación de resultados y entrega de dictamen

[...]

Finalmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó lo siguiente:

[...]

**VIII. EFECTOS.**

[...]

**118.** Por lo expuesto, se vincula al Congreso del Estado de Morelos, para que dentro de los doce meses siguientes a la notificación que se haga de los puntos resolutivos de esta resolución lleve a cabo, conforme los parámetros fijados en el apartado VII de esta decisión, la consulta a las personas con discapacidad y la consulta a los pueblos indígenas y afromexicanos en la entidad y, dentro del mismo plazo, emita la regulación correspondiente.

**119.** Lo anterior, en el entendido de que la consulta no debe limitarse a las disposiciones declaradas inconstitucionales, sino que deberá tener un carácter abierto, a efecto de otorgar la posibilidad de que se facilite el diálogo democrático y busque la participación de las personas con discapacidad y los pueblos indígenas y afromexicanos en la entidad, en relación con cualquier aspecto regulado en la Ley de Educación del Estado de Morelos.

**120.** El plazo establecido, además, permite que no se prive a las personas con discapacidad y a los pueblos indígenas y afromexicanos en la entidad de los posibles efectos benéficos de las normas, y al mismo tiempo permitir al Congreso del Estado de Morelos atender a lo resuelto en la presente ejecutoria. Lo anterior, sin perjuicio de que, en un tiempo menor, la legislatura local pueda legislar en relación con los preceptos declarados inconstitucionales, bajo el presupuesto ineludible de que efectivamente se realicen las consultas en los términos fijados por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.

**121.** Finalmente, se hace notar que por las características propias de la consulta en materia de discapacidad, la misma podrá realizarse en formatos digitales accesibles, en consulta con las organizaciones de personas con discapacidad, a diferencia de la consulta a los pueblos indígenas y afromexicanos de la entidad.

**IX. PUNTOS RESOLUTIVOS.**

**122.** Por lo expuesto y fundado se resuelve:

**PRIMERO**. Es **procedente** y **fundada** la acción de inconstitucionalidad.

**SEGUNDO.** Se declara la **invalidez** de los artículos 43, 65, 74, del 78 al 84,95 y 96 de la Ley de Educación del Estado de Morelos, publicada en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, de conformidad con el **apartado VII** de esta decisión.

**TERCERO**. La declaratoria de invalidez decretada surtirá sus efectos a los **doce meses** siguientes a la notificación de estos puntos resolutivos al Congreso del Estado de Morelos, en la inteligencia de que, dentro del referido plazo, previo desarrollo de las respectivas consultas indígena y afromexicana, así como a las personas con discapacidad, ese Congreso deberá legislar en los términos precisados en los **apartados VII** y **VIII** de este fallo.

**CUARTO**. **Publíquese** esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del Estado de Morelos, así como en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.

[...]

**IX. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 111/2022 Y SU ACUMULADA 112/2022.** El Poder Ejecutivo Federal y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, promovieron acción de inconstitucionalidad 111/2022 y su acumulada 112/2022, respectivamente, en contra de los artículos 12, en la porción normativa: *"pertenezca a un municipio o comunidad indígena u originario, afromexicana o"*; y 13 de la Ley para la Declaración Especial de Ausencia de Personas Desaparecidas en el Estado de Morelos, expedido mediante Decreto Número trescientos cincuenta y siete, publicado en el Periódico Oficial para el Estado de Morelos, al seis de julio del dos mi veintidós, misma que fue resuelta con fecha **dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés**, cuyos conceptos de invalidez radicaron en lo siguiente:

[...]
**4. Conceptos de invalidez.** El Poder Ejecutivo Federal expuso, esencialmente, los siguientes conceptos de invalidez:

- El artículo 4.3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, establece que los Estados celebrarán consultas estrechas y colaborarán activamente con las personas con discapacidad.
- Derivado de lo anterior, el Estado adquirió el compromiso de adoptar las medidas legislativas, administrativas y de otra índole para hacer efectivos los derechos humanos de las personas con discapacidad, reconocidos en la mencionada Convención, como el derecho a la consulta en la elaboración y aplicación de la legislación y políticas que les impacten a las personas con discapacidad.
- En ese sentido el órgano legislativo debe establecer reglas, plazos y procedimientos en una convocatoria en la que se informe de manera amplia accesible y por distintos medios,

la manera en que las personas con discapacidad y las organizaciones que los representan, podrán participar tanto en el proyecto de iniciativa, como en el proceso legislativo.

- Por tanto, la consulta previa en materia de derechos de personas con discapacidad es una formalidad esencial del procedimiento legislativo, la cual se actualiza cuando las acciones estatales incidan en los intereses y/o derechos de este grupo.
- En el presente caso, se advierte que en el proceso legislativo que dio origen a la norma impugnada, no existió consulta previa pública, accesible y adecuada a personas con discapacidad, a través de sus representantes o con las asociaciones que representan, por lo que el precepto reclamado es contrario al marco constitucional y convencional establecido en materia de personas con discapacidad, pues en una medida que atañe directamente a este sector de la población.
- El artículo 13 de la Ley para la Declaración Especial de Ausencia de Personas Desaparecidas en el Estado de Morelos, se hace referencia a cuando las personas con discapacidad soliciten la declaración especial de ausencia, por lo que es claro que tiene incidencia de forma directa en los intereses y derechos de dicho grupo vulnerable.
- Por otro lado, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la acción de inconstitucionalidad 41/2018 y su acumulada 42/2018, señaló los elementos mínimos para cumplir con la obligación establecida en el artículo 4.3 de la Convención mencionada, es decir, que la participación, de las personas con discapacidad en la consulta debe ser: I) previa, pública, abierta y regular; II) estrecha y con participación preferentemente directa de las personas con discapacidad; III) accesible; IV) informada; V) significativa; VI) con participación efectiva; y, VII) transparente.
- Por otro lado, la consulta previa en materia de derechos de personas con discapacidad es una formalidad esencial de procedimiento legislativo y en el presente caso el poder legislativo estatal no cumplió con ella; consecuentemente el proceso legislativo de creación de la norma reclamada se encuentra viciado de origen.
- Por consiguiente, al no haberse llevado a cabo a consulta exigible en el procedimiento legislativo, se debe declara la invalidez del artículo 13 de la Ley para la Declaración Especial de Ausencia de Personas Desaparecidas en el Estado de Morelos, por vulnerar el artículo 1°. de la Constitución Federal y el numeral 4.3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

[...]

[...]

9. **Conceptos de invalidez.** La Comisión Nacional de los Derechos Humanos expuso, esencialmente, los siguientes conceptos de invalidez:

- Los artículos 12, en la porción normativa "pertenezca a un municipio o comunidad indígena u originario, afromexicano"; y 13 de la Ley para la Declaración Especial de Ausencia de Personas Desaparecidas en el Estado de Morelos vulneran el derecho a la consulta de los pueblos y comunidad indígenas, así como de las personas con discapacidad reconocidos en los artículos 6 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre los Pueblos Indígenas y Tribales, y 4 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, respectivamente, que exigen celebrar consultas con esos sectores de la población durante el proceso de elaboración de leyes que les afecten.
- Lo anterior, en virtud que se trata de disposiciones que están dirigidas específicamente a las personas que forman parte de un pueblo o comunidad indígena o afromexicana, así como a quienes viven con alguna discapacidad, pues establecen las medidas y obligaciones que las autoridades deberán observar en los procedimientos de declaración especial de ausencia en los que intervengan personas miembros de eso grupos vulnerables, por lo que es indudable que impactan directamente en sus intereses y en el ejercicio de sus derechos.
- Sin embargo, del análisis del proceso legislativo que dio origen a las normas en combate se advierte que el Congreso del Estado de Morelos no llevó a cabo el proceso participativo correspondiente, lo que significa que transgredió su derecho a ser consultados en todas las medidas legislativas que incidan directamente en sus derechos.

[...]

En virtud de los conceptos de invalidez ya citados, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, realizó el parámetro constitucional y convencional del derecho a la consulta de las personas, pueblos y comunidades originarias y afromexicanas, manifestando entre otras cosas que:

[...]

- Se les reconoce una multiplicidad de derechos específicos, los cuales se encuentran fundamentalmente en el artículo 2°. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en diversos instrumentos internacionales vinculantes, como lo es el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes.
- Entre los mencionados derechos de forma especial y específica se reconocen a favor de este sector de la población, se encuentra el de ser consultado cada vez que se prevean medidas susceptibles de afectarles directamente.
- Si bien es cierto que el derecho a la consulta previa, libre culturalmente adecuada e informada que tienen reconocido los pueblos y comunidades indígenas frente a

las acciones estatales, no se encuentra desarrollado en la norma constitucional, en el ámbito internacional si se encuentran dimensiones más protectoras, particularmente, el convenio 169 de la OIT, consagra en su artículo 6 el derecho a la consulta de estos pueblos y comunidades.

- Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reiterado la obligación de consultar a las comunidades y pueblos indígenas y tribales sobre toda medida administrativa o legislativa que afecte sus derechos reconocidos en la normatividad interna e internacional, así como la obligación de asegurar los derechos de los pueblos indígenas a la participación en las decisiones de los asuntos que conciernan a sus intereses.
- La consulta constituye una prerrogativa necesaria para salvaguardar la libre determinación de las comunidades indígenas, así como la totalidad de derechos e instituciones políticas, sociales, económicas y culturales que les pertenecen, incluyendo los derechos culturales y patrimoniales que la Constitución y los Tratados Internacionales les reconocen.
- Se ha considerado que el derecho a la consulta tiene un doble carácter, es un derecho humano colectivo de los pueblos indígenas, íntimamente vinculado con su derecho a la libre determinación.
- Por ende, el derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado es un instrumento con el cuentan los propios pueblos y comunidades para defender otros derechos colectivos, tales como su derecho a la identidad cultural, a su tierra, territorio, recursos naturales, a conservar sus instituciones y sistemas normativos y, en caso extremos, su derecho a la propia supervivencia como pueblos.

[...]

Asimismo, realizó el parámetro constitucional y convencional del derecho a la consulta de las personas con discapacidad, manifestando entre otras cosas que:

[...]

- La obligación de consultar a las personas con discapacidad deriva del artículo 4.3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el cual establece la ineludible obligación de los Estados de celebrar consultas previas, estrechas y de colaboración activa con las personas con discapacidad para la elaboración de legislación sobre cuestiones relacionadas con ellas.
- Esta disposición refleja la importancia de una participación activa de las personas con discapacidad para la defensa y reconocimiento de sus derechos.
- En ese sentido, el mencionado artículo 4.3 forma parte del parámetro de control de regularidad

constitucional del orden jurídico mexicano, por mandato establecido en el artículo 1°. de la Constitución Federal, en relación con el diverso 133 del mismo ordenamiento.

[…]

Finalmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó lo siguiente:

[…]

**VII. EFECTOS.**
[…]

**107.** En ese sentido, se **declara la invalidez de los artículos 12**, en su porción normativa: **"pertenezca a un municipio o comunidad indígena u originario, afromexicana o"; y 13** de la Ley para la Declaración Especial de Ausencia de Personas Desaparecidas en el Estado de Morelos, expedida mediante el Decreto Número trescientos cincuenta y siete publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Gobierno del Estado de Morelos, el seis de julio de dos mil veintidós.

**108.** Asimismo, este Tribunal Pleno determina que **lo procedente es que los efectos de invalidez deben postergarse por doce meses.** Ello, con el objetivo de que la regulación respectiva continúe vigente, hasta en tanto el Congreso local cumpla con los efectos vinculatorios precisados a continuación, lo que permitirá, incluso la eficacia del derecho humano a la consulta a personas con discapacidad y a los integrantes de pueblos o comunidades indígenas y afromexicanas.

**109.** La declaración de validez no se limita a la expulsión del orden jurídico de las normas consideradas como inconstitucionales, sino que conlleva la obligación por parte del Congreso estatal para que **dentro de los doce meses siguientes a la notificación de los puntos resolutivos de esta resolución, fecha en que surtirá efectos la declaración de invalidez decretada**, lleve a cabo, conforme a los parámetros fijados en el apartado VI, las consultas a personas con discapacidad y a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos.

**110.** Dentro del mismo plazo, previa realización de las consultas mencionadas, deberá emitir la regulación correspondiente, en el entendido que las consultas deberán tener un carácter abierto, a efecto de otorgar la posibilidad de que se facilite el diálogo democrático y busque la participación de los grupos vulnerables involucrados, en relación con cualquier medida susceptible de afectarles.

**111.** El plazo establecido, además, permite que no se prive a las personas con discapacidad y a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, de los posibles efectos benéficos de la

norma, y al mismo tiempo permite al Poder Legislativo del Estado de Morelos atender a lo resuelto en la presente ejecutoria. Sin perjuicio de que en un tiempo menor el Congreso pueda legislar, bajo el presupuesto ineludible de que efectivamente se realicen las consultas en los términos fijados por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.

**VIII. DECISIÓN.**

Por lo antes expuesto, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve:

**PRIMERO.** Es procedente y fundada la presente acción de inconstitucionalidad y su acumulada.

**SEGUNDO.** Se declara la invalidez de los artículos 12, en su porción normativa *"pertenezca a un municipio o comunidad indígena u originario,afromexicana o"*, y 13 de la Ley para la Declaración Especial de Ausencia de Personas Desaparecidas en el Estado de Morelos, expedida mediante Decreto Número Trescientos Cincuenta y Siete, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el seis de julio de dos mil veintidós, por los motivos expuestos en el apartado VI de esta decisión.

**TERCERO.** La declaratoria de invalidez decretada surtirá sus efectos a los doce meses siguientes a la notificación de estos puntos resolutivos al Congreso del Estado de Morelos, en la inteligencia de que, dentro del referido plazo, previo desarrollo de las respectivas consultas a las personas con discapacidad, así como a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, ese Congreso deberá legislar en los términos precisados en el apartado VII de esta sentencia.

**CUARTO.** Publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del Estado de Morelos, así como en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.

[...]

**X. REQUERIMIENTO DE LA SUPREMA CORTE PARA REALIZAR LA CONSULTA PREVIA.** Con fecha trece de agosto de dos mil veintiséis, el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió un acuerdo de requerimiento en la Acción de Inconstitucionalidad 111/2022 y su acumulada 112/2022, en el sentido siguiente:

[...]

Asimismo, señala que conforme a la legislación electoral de la citada entidad (Morelos), las consultas solo pueden celebrarse noventa días naturales previos a la fecha en que inicien los procesos electorales locales del año en curso y, dado que el próximo proceso electoral en la entidad inicia el uno de septiembre del año en curso, solicita que se le otorgue una prórroga para dar cumplimiento al fallo dictado en autos.

Atento a lo anterior, dígasele al promovente que **no ha lugar** a acordar de conformidad, toda vez que la Presidencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación no cuenta con facultades para realizar modificaciones a los plazos que el Tribunal Pleno haya establecido al momento de dictar una sentencia para efecto de su cumplimiento.

Aunado a esto, no pasa desapercibido que el plazo para que la autoridad legislativa llevara a cabo el cumplimiento de la sentencia ha fenecido, ya que de conformidad con los efectos que fueron precisados en la ejecutoria, el Congreso local tuvo doce meses a partir de la notificación de los puntos resolutivos para llevar a cabo la consulta a las personas con discapacidad y a los pueblos o comunidades indígenas y afromexicanas para la emisión de la regulación correspondiente.

En ese sentido, se advierte que la notificación de los puntos resolutivos al Congreso del Estado de Morelos re realizó el veintiuno de abril de dos mil veintitrés por lo que dicha autoridad tuvo hasta el veintiuno de abril de dos mil veinticuatro para cumplir con lo ordenado en el fallo.

Asimismo, debe destacarse que la materia de la normatividad que el Congreso del Estado debe emitir una vez que haya realizado las consultas señaladas, son respecto a la Ley para la Declaración Especial de Ausencia de Personas Desaparecidas en el Estado de Morelos, la cual no es electoral.

[...]

De los preceptos antes citados, se deduce que tanto el Congreso del Estado como el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana son autoridades que tienen facultades reconocidas en materia de mecanismos de participación ciudadana y que la consulta ciudadana es una de dichos mecanismos.

Sin embargo, aunque el Instituto cuenta con atribuciones relacionadas con el desarrollo de la consulta ciudadana, de la propia normatividad se advierte que corresponde al Congreso del Estado de Morelos iniciar el proceso respectivo, pues ésta es una de las autoridades a las que se le reconoce la facultad de convocar a la realización de las consultas.

En ese orden de ideas, cabe señalar que de las constancias que obren en autos no se advierte que el Congreso del Estado –que es la autoridad a la que la sentencia ordenó su cumplimiento- haya

propiciado hasta el momento, la participación del referido Instituto para el desarrollo de las consultas ordenadas en el fallo, atento a lo estipulado en la legislación que alude.

**II. Requerimiento.**

En ese tenor, con apoyo en el artículo 45 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, **se requiere** al **Poder Legislativo del Estado de Morelos, por conducto del Diputado Isaac Pimentel Mejía, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso estatal,** para que, dentro del plazo de **veinte días hábiles,** informe si en atención a lo establecido en la Ley de Participación Ciudadana de la entidad, ha solicitado al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana su intervención para que coordine la organización y desarrollo de las consultas a las personas con discapacidad y de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas ordenadas en la sentencia dictada en este asunto.

Se precisa a la autoridad que, para efecto de desahogar el requerimiento formulado, deberá acompañar copia certificada de todas las constancias que acrediten su dicho.

[...]

De lo anterior, se advierte que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha ordenado la realización de sendas consultas, previamente identificadas mediante las acciones de inconstitucionalidad 71/2021 y 111/2022 y su acumulado 112/2022, ambas relacionadas con las personas con discapacidad y de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, para su materialización de manera inmediata.

**XI. ACUERDO PARLAMENTARIO ACUERDO/100/SSLYP/DPYTL//Año3/P.O.1/26.**El día diez de septiembre de dos mil veintiséis, se recibió en la oficialía de partes de este Instituto Electoral Local, escrito signado por el Mtro. César Francisco Betancourt López, en su calidad de Secretario de Servicios Legislativos y Parlamentarios del Congreso del Estado de Morelos, mediante el cual hizo del conocimiento a la Consejera Presidenta, la emisión del acuerdo identificado con el alfanumérico **ACUERDO/100/SSLyP/DPyTL/Año3/P.O.1/26, ACUERDO PARLAMENTARIO, POR EL CUAL SE SOLICITA AL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA LA REALIZACIÓN DE CONSULTAS PREVIAS EN CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD 71/2021 Y 111/2022 Y SU ACUMULADO 112/2022** , aprobado en Sesión Ordinaria de Pleno, celebrada el día nueve de septiembre del año en curso.

En dicho acuerdo parlamentario el Congreso, realiza un análisis de lo determinado en las diversas acciones de inconstitucionalidad, así como de la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Morelos, refiriendo que de la

interpretación sistemática y funcional del marco constitucional y legal, se concluye que en Morelos se ha configurado un modelo de democracia participativa e inclusiva que encuentra en la consulta ciudadana su instrumento idóneo.

Aunado a lo anterior, refiere que si bien la Ley de Participación concibe operativamente a la consulta como un mecanismo a través del cual los poderes públicos someten a consideración de la ciudadanía actos o decisiones de impacto social relevante, este estándar normativo local **debe armonizarse cuando la materia objeto del procedimiento legislativo incida de forma directa en los derechos de grupos de atención prioritaria.**

Y continúa diciendo que, cuando el Congreso del Estado actúa en acatamiento a los mandatos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para legislar respecto a los derechos de las personas con discapacidad y de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, **la figura de la consulta ciudadana** prevista en el artículo 3, fracción IV, en relación con los diversos 69, 70 y 71 de la Ley de Participación Ciudadana, **adquiere una naturaleza jurídica que la lleva a constituirse en un mecanismo de consulta previa, libre, informada, de buena fe, accesible y culturalmente adecuada.**

Posteriormente, hace referencia a que **el marco de participación ciudadana del estado de Morelos es la vía institucional y legalmente establecida para materializar las garantías constitucionales y convencionales de participación efectiva consagradas en el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y el artículo 4.3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad**, y que el marco legal y constitucional aplicable establece una distribución de competencias que salvaguardan la operatividad de este mecanismo de participación ciudadana.

Asimismo determina que, corresponde de manera exclusiva a esa Quincuagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, en ejercicio de la facultad soberana concedida por el artículo 40, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, la potestad de iniciar el procedimiento legislativo, fijar la materia sobre la cual versarán las reformas y emitir la convocatoria formal correspondiente, y que por su parte, **la legislación local le otorga al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana la calidad de autoridad dotada de autonomía constitucional y capacidad técnica para coordinar, organizar, desarrollar y dar fe de los cómputos y resultados de las consultas ciudadanas.**

De igual manera, menciona **que el acuerdo parlamentario** por el cual se está realizando la solicitud formal al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana **constituye una petición de la colaboración interinstitucional en la que el Estado se asegura que los procesos deliberativos cumplan con la totalidad de las etapas y formalidades esenciales del procedimiento** exigidas por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Aunado a todo lo ya mencionado, el acuerdo parlamentario realiza un análisis de cómo se deben llevar a cabo el cumplimiento a las consultas, el cual se transcribe a continuación:

> [...]
> Ahora bien, acorde con la delimitación competencial expresada en el acuerdo de requerimiento dictado dentro de la acción de inconstitucionalidad 111/2022 y su acumulada 112/2022, la Suprema Corte de Justicia de la Nación precisó que:
>
> La materia de las adecuaciones legislativas encomendadas (como la regulación en la Ley para la Declaración Especial de Ausencia de Personas Desaparecidas en el Estado de Morelos), no es de naturaleza electoral, por lo que **las limitantes temporales vinculadas a los procesos electorales locales no constituyen un impedimento legal para el desarrollo inmediato de los procesos de consulta previa.**
>
> Si bien, con fundamento en los artículos 40, fracción II y 19 Bis de la Constitución Política del Estado Libre y soberano de Morelos, así como el artículo 71 de la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Morelos, la competencia legislativa y la iniciativa para convocar a la consulta ciudadana recaen constitucional y legalmente en este Poder Legislativo Estatal, **la Ley atribuye formalmente al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana la facultad técnica y especializada de coordinar la organización, desarrollo, cómputo y difusión de los resultados de los mecanismos de participación ciudadana en el Estado.**
> [...]
>
> [...]
> Es a través del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana como este Congreso Estatal podrá garantizar que los procesos de consulta a las personas con discapacidad y a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas se apeguen estrictamente a los parámetros constitucionales y convencionales exigidos en las ejecutorias; **esto es, que se desarrollen bajo los principios de ser previas, libres, informadas, de buena fe, transparentes, accesibles y culturalmente adecuadas.**
>
> [...]
>
> [...]
>
> Por otra parte, si bien es cierto que el acuerdo de requerimiento notificado el trece de agosto de dos mil veintiséis por la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue emitido formalmente dentro de la acción de inconstitucionalidad 111/2022 y su acumulada 112/2022, esta LVI Legislatura advierte la procedencia formal, jurídica y operativa de ejecutar de forma simultánea y coordinada dicho mandato junto con la ejecutoria

dictada en la acción de inconstitucionalidad 71/2021, **por lo cual se solicita al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (IMPEPAC) la organización de un solo procedimiento integral de consulta previa**.

[…]

[…]
Por lo tanto, este Congreso del Estado de Morelos determina que la solicitud que se instruye enviar al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana **incluya en una sola y única consulta las fases organizativas requeridas para dar cumplimiento a las sentencias** dictadas en las acciones de inconstitucionalidad 71/2021 y 111/2022 y su acumulada 112/2022.

[…]

El énfasis es propio

Y finalmente, aprueba el acuerdo parlamentario de referencia para quedar la solicitud de la siguiente manera:

[…]

**ACUERDO PARLAMENTARIO**

**POR EL CUAL SE SOLICITA AL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA LA REALIZACIÓN DE CONSULTAS PREVIAS EN CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD 71/2021 Y 111/2022 Y SU ACUMULADO 112/2022**

**ARTÍCULO ÚNICO.** En ejercicio de la facultad soberana conferida en los artículos 40, fracción LIV, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, se acuerda, solicitar al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, que se lleve a cabo el mecanismo de participación de consulta ciudadana respecto de la acción de inconstitucionalidad 71/2021 relacionada con la Ley de Educación del Estado de Morelos, así como la acción de inconstitucionalidad 111/2022 y su acumulado 112/2022 relacionada con la Ley para la Declaración Especial de Ausencia de Personas Desaparecidas en el Estado de Morelos.
[…]

## XII. DE LA NATURALEZA JURÍDICA DEL MECANISMO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA SOLICITADO.

### De las características del mecanismo de consulta solicitado y su diferenciación

**respecto de la consulta ciudadana ordinaria**

Del contenido del Acuerdo Parlamentario de referencia, se advierte que el Congreso solicita a este Instituto llevar a cabo el mecanismo de participación de consulta ciudadana, con fundamento en los artículos 3, fracción IV, 69, 70 y 71 de la Ley de Participación Ciudadana, al respecto, este Órgano Comicial estima conveniente precisar la naturaleza jurídica del mecanismo a desarrollar, en virtud de que la consulta previa ordenada por el Máximo Tribunal atiende a un origen, fuente y régimen constitucional especializado, cuyas características y estándares internacionales difieren de los mecanismos de participación ciudadana de carácter general regulados por la legislación local.

Al respecto, debe precisarse que la consulta previa ordenada por la Suprema Corte constituye, en sentido amplio, una forma de participación pública. Sin embargo, no es jurídicamente equivalente a la Consulta Ciudadana ordinaria regulada por la legislación local, ni puede recibir automáticamente el mismo tratamiento, pues su fundamento, finalidad, sujetos titulares, objeto, metodología y función dentro del procedimiento legislativo son distintos. La diferencia de naturaleza jurídica produce consecuencias directas en la organización del procedimiento.

La Consulta Ciudadana ordinaria constituye un mecanismo general de participación mediante el cual la ciudadanía, dentro del ámbito territorial correspondiente, expresa su opinión respecto de un tema de impacto trascendental o de interés público, según corresponda, bajo un esquema de participación abierto a la ciudadanía en general.

Por su parte, la consulta previa especializada se dirige a los grupos directamente afectados por la medida legislativa de que se trate y exige condiciones específicas para garantizar su participación efectiva, entre ellas, la identificación de los sujetos consultados, el respeto a sus formas de organización y representación, la provisión de información suficiente y accesible, así como la consideración y documentación de sus aportaciones conforme a los estándares constitucionales y convencionales aplicables.

Las consultas ordenadas en las acciones de inconstitucionalidad 71/2021 y 111/2022 y su acumulada 112/2022 tienen su origen inmediato en ejecutorias del Tribunal Pleno de la Suprema Corte, se vinculan con el derecho de las personas con discapacidad y de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas a participar de manera previa, efectiva y diferenciada cuando una medida legislativa pueda afectar directamente sus derechos o intereses.

a) Fuente y naturaleza jurídica del derecho que se pretende garantizar.

Los mecanismos regulados en la Ley de Participación Ciudadana constituyen instrumentos de democracia participativa que desarrollan las disposiciones del artículo 19 Bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. Entre ellos, se encuentra la Consulta Ciudadana, mediante la cual las autoridades previstas en la propia legislación someten a consideración de la ciudadanía temas de impacto trascendental y territorial, de conformidad con las reglas de procedencia, sujetos, ámbito territorial y desarrollo establecidas en dicho ordenamiento.

En cambio, las consultas ordenadas en las ejecutorias dictadas en las acciones de inconstitucionalidad 71/2021 y 111/2022 y su acumulada 112/2022 no corresponden a un mecanismo cuya procedencia derive de las reglas generales de participación ciudadana previstas en la legislación local, sino al cumplimiento de un derecho humano de fuente constitucional y convencional, reconocido a favor de sujetos determinados, el derecho de las personas con discapacidad a ser consultadas,

previsto en el artículo 4.3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y el derecho de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas a la consulta previa, previsto en el artículo 2°, apartado A, fracción XIII, y apartado C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6 y 7 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y en los artículos 19 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y XXIII de la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Aunado a ello en particular la Convención sobre los Derechos del Niño, en sus artículos 3 y 12, establece la obligación de atender primordialmente al interés superior de la niñez y de garantizar que sus opiniones sean escuchadas y debidamente valoradas conforme a su edad y madurez. Por su parte, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en sus artículos 7 y 4, numeral 3, obliga a adoptar las medidas necesarias para asegurar que niñas y niños con discapacidad gocen plenamente de sus derechos y para consultarles estrechamente, a través de las organizaciones que les representan, cuando se adopten decisiones que les conciernan, debe interpretarse de manera sistemática, de tal forma que el derecho a la consulta de las personas con discapacidad incorpore las condiciones específicas que permitan la participación de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, reconociéndoles como titulares de derechos y como participantes activos en la construcción de las decisiones legislativas que inciden en su educación, desarrollo integral e inclusión social.

Por tanto, resulta indispensable que se reconozca expresamente a niñas, niños y adolescentes con discapacidad como sujetos de participación en las consultas legislativas e implementar mecanismos específicos, accesibles, adecuados a su edad, formas de comunicación y necesidades de apoyo, esto en atención al principio del interés superior de la niñez y al derecho de niñas, niños y adolescentes a participar y ser escuchados en los asuntos que les afectan, resulta necesario garantizar su intervención efectiva en los procesos de consulta legislativa, particularmente cuando las disposiciones objeto de análisis incidan en el ejercicio de sus derechos educativos.

**De la naturaleza jurídica de las consultas solicitadas y de la imposibilidad de darles el tratamiento de un mecanismo ordinario de participación ciudadana.**

Del análisis integral del Acuerdo Parlamentario notificado a este Instituto, se advierte que el Congreso del Estado solicita la realización de un mecanismo que denomina "consulta ciudadana", con fundamento en los artículos 3, fracción IV, 69, 70 y 71 de la Ley de Participación Ciudadana.

Al respecto, resulta necesario precisar que, si bien la consulta constituye un mecanismo de participación en sentido amplio, la naturaleza de las consultas ordenadas por la Suprema Corte no corresponde al mecanismo de participación ciudadana regulado en los artículos 69, 70 y 71 de la Ley de Participación.

Lo anterior obedece a que las consultas ordenadas en las acciones de inconstitucionalidad 71/2021 y 111/2022 y su acumulada 112/2022 tienen su origen en mandatos jurisdiccionales específicos y constituyen una garantía para la participación efectiva de los grupos directamente involucrados en las materias legislativas objeto de cada ejecutoria, con componentes específicos para cada

grupo sujeto de consulta por lo que su desarrollo debe sujetarse a los parámetros constitucionales, convencionales y jurisdiccionales establecidos para cada caso.

En la acción de inconstitucionalidad 71/2021, la Suprema Corte vinculó al Congreso del Estado de Morelos a realizar las consultas a las personas con discapacidad y a los pueblos indígenas y afromexicanos respecto de la legislación en materia de educación.

De igual manera, en la acción de inconstitucionalidad 111/2022 y su acumulada 112/2022, relacionada con la Ley para la Declaración Especial de Ausencia de Personas Desaparecidas en el Estado de Morelos, la Suprema Corte determinó la invalidez de las disposiciones impugnadas y vinculó al Congreso local al desarrollo de las consultas correspondientes.

Ambas determinaciones constituyen el origen jurisdiccional de las consultas cuya realización se solicita actualmente a este Instituto, por lo que sus términos y alcances resultan relevantes para delimitar la naturaleza, objeto y sujetos de cada uno de los mecanismos que, en su caso, corresponda implementar.

Por lo tanto, no se está ante un ejercicio único y general de consulta ciudadana, sino ante obligaciones de consulta que derivan de dos ejecutorias distintas, relacionadas con ordenamientos jurídicos diversos y dirigidas a grupos sujetos de consulta específicos. Por ello, su diseño, desarrollo y documentación deben permitir identificar, en cada caso, la ejecutoria que le da origen, el ordenamiento materia de consulta, el grupo sujeto de consulta, la metodología aplicable y las etapas correspondientes.

En consecuencia, antes de iniciar actuaciones materiales, resulta necesario precisar cuál es la naturaleza jurídica del mecanismo que se pretende implementar, pues la consulta ciudadana regulada en los artículos 69 a 78 de la Ley de Participación Ciudadana, y las consultas previas especializadas ordenadas por la Suprema Corte tienen elementos diferenciados que inciden directamente en su organización y desarrollo.

Estas figuras no son jurídicamente equivalentes, pues difieren en:

a) **Origen y fundamento**. La consulta ciudadana del artículo 69 tiene su origen en la facultad legal de los poderes públicos para someter a consideración de la ciudadanía **"cualquier tema de impacto trascendental y territorial"**; las consultas ordenadas por la SCJN tienen su origen en un mandato jurisdiccional vinculante derivado del control de constitucionalidad y del reconocimiento de derechos humanos de grupos de atención prioritaria.

b) **Sujetos que deben participar.** El artículo 70 de la Ley de Participación Ciudadana dirige la consulta a la ciudadanía en general, mientras que las consultas ordenadas por la SCJN exigen la participación estrecha, directa y diferenciada de las personas con discapacidad y de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas específicamente.

c) **Metodología y fases.** Se reconoce que las consultas a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas deben observar, como mínimo, una fase preconsultiva, informativa, de deliberación interna, de diálogo y de decisión, culturalmente adecuadas conforme a los usos y costumbres de cada comunidad; mientras que la consulta a personas con discapacidad exige formatos de lectura fácil, lenguaje claro, ajustes razonables y momentos de participación previos al dictamen y ante el Pleno.

A continuación se muestra una tabla con los elementos más importantes en la metodología y fases de las consultas que se analizan:

| CONSULTA A PERSONAS DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS Y AFROMEXICANAS |
|---|
| **Fase pre consultiva**: que permita la identificación de la medida legislativa que debe ser objeto de consulta, la identificación de los pueblos y comunidades indígenas a ser consultados, así como la determinación de la forma de llevar a cabo el proceso, la forma de intervención y la formalización de acuerdos lo cual se deberá definir de común acuerdo entre autoridades gubernamentales y representantes de las comunidades indígenas. |
| **Fase informativa:** de entrega de información y difusión del proceso de consulta, con la finalidad de contar con información completa, previa y significativa sobre las medidas legislativas. Ello puede incluir, por ejemplo, la entrega por parte de las autoridades de un análisis y evaluación apropiada de las repercusiones de las medidas legislativas. |
| **Fase de deliberación interna**: En esta etapa –que resulta fundamental- los pueblos y comunidades indígenas a través del diálogo y acuerdos, evalúan internamente la medida que les afectaría directamente. |
| **Fase de diálogo** entre los representantes del Estado y representantes de los pueblos indígenas con la finalidad de generar acuerdos. |
| **Fase de decisión**, comunicación de resultados y entrega de dictamen. |

| CONSULTA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD<br>**(observación general número 7 del Comité de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad )** |
|---|
| **Carácter previo, informado y de buena fe.** Las consultas deben celebrarse con anterioridad a la adopción de la decisión definitiva, sobre la base de información oportuna, completa y accesible, en un marco de transparencia, respeto mutuo y diálogo genuino, evitando toda forma de simulación o gesto simbólico. |
| **Participación directa a través de las organizaciones de las personas con discapacidad.** El Comité distingue expresamente entre las organizaciones "de" personas con discapacidad -integradas, dirigidas y controladas por personas con discapacidad- y las organizaciones "para" personas con discapacidad o de la sociedad civil en general que prestan servicios o defienden sus intereses sin estar conformadas mayoritariamente por ellas. Los Estados parte deben "dar prioridad a las opiniones de las organizaciones de personas con discapacidad al abordar cuestiones relativas a estas personas". |
| **Diversidad y representación de la amplia heterogeneidad del colectivo.** La consulta debe garantizar la integración activa de organizaciones que representen a todos los grupos de personas con discapacidad, incluidas, entre otras, las personas con deficiencias visuales, las mujeres, las personas mayores, las niñas y los niños, las personas con discapacidad que pertenecen a pueblos indígenas y las que residen en zonas rurales, atendiendo a las situaciones de interseccionalidad. |
| **Accesibilidad procedimental.** Los procesos de consulta deben ser plenamente accesibles, lo que comprende la disponibilidad de formatos como braille, |

| |
|---|
| lectura fácil, intérpretes de lengua de señas, herramientas digitales accesibles y la provisión de ajustes razonables, a fin de asegurar la participación efectiva de los representantes de todas las personas con discapacidad. |
| **Diversidad de modalidades.** El Comité enuncia expresamente, como mecanismos válidos, las mesas redondas, los diálogos participativos, las vistas públicas, las encuestas y las consultas en línea, respetando la diversidad y autonomía de las personas consultadas. |
| **Plazos razonables y realistas.** Los procesos deben prever calendarios adecuados, con divulgación previa, oportuna y amplia de la información pertinente, y considerar la naturaleza de las organizaciones de personas con discapacidad, que frecuentemente operan con recursos voluntarios. |
| **Incidencia sustantiva y devolución de resultados.** Las opiniones recabadas deben "recibir la debida consideración", reflejarse en las decisiones que se adopten e informarse motivadamente a las personas participantes sobre el resultado del proceso. |

Ninguno de estos elementos metodológicos está previsto en el procedimiento estándar de consulta ciudadana de los artículos 69 a 71 de la Ley de Participación Ciudadana, que fue diseñado para consultas de alcance general y no para consultas especializadas a grupos de atención prioritaria, como se puede observar.

| **CONSULTA CIUDADANA** |
|---|
| Podrá ser **convocada** por la persona titular del Poder Ejecutivo, **el Congreso del Estado** y los titulares de las Presidencias Municipales, de manera individual o conjunta, **señalando de forma clara y precisa la naturaleza del acto materia de consulta a la ciudadanía.** |
| El Instituto coordinará la organización, desarrollo, cómputo y difusión de los resultados de la consulta ciudadana. |
| Deberá expedirse la convocatoria por la autoridad, o autoridades convocantes por lo **menos quince días hábiles previos a la fecha de realización** y deberá **difundirse en los lugares de mayor afluencia de habitantes de la demarcación territorial correspondiente y en medios electrónicos.** |
| La convocatoria deberá contener por lo menos:<br>I. La autoridad, o en su caso, las autoridades que convocan a Consulta Ciudadana.<br>II. **La descripción específica del acto materia de la consulta** u omisiones de las autoridades estatales y municipales materia de la consulta;<br>III. El ámbito de aplicación territorial de la consulta;<br>IV. **La exposición de motivos, razones y fundamento por el cual lo que se propone someter a consulta ciudadana se considera de importancia por interés general y trascendental para la vida pública de la demarcación territorial;**<br>V. **Fecha, horario y lugares donde podrá participar la ciudadanía**, y<br>VI. **El método o instrumento mediante el cual se implementará la consulta ciudadana.** |

e) **Efectos y naturaleza vinculante.** Mientras que los resultados de una

consulta ciudadana ordinaria pueden tener carácter orientador para la autoridad convocante, las consultas ordenadas por la Suprema Corte constituyen una formalidad esencial del procedimiento legislativo, cuya omisión o desarrollo defectuoso puede dar lugar a la invalidez de la norma que de ella derive, conforme lo determinó el Tribunal Pleno en los apartados VII y VIII de las sentencias referidas.

A partir de lo anterior, se considera jurídicamente necesario que las consultas se diseñen y documenten de manera diferenciada, atendiendo a cada ejecutoria, a cada ordenamiento legal y a cada grupo sujeto de consulta.

En consecuencia, este Instituto estima indispensable que, de manera previa al inicio de cualquier actuación material, se defina con precisión la naturaleza jurídica del mecanismo a implementar y el alcance de cada una de las consultas que, en su caso, deban llevarse a cabo, así como los sujetos involucrados, metodología, fases, calendario, responsabilidades institucionales y presupuesto correspondiente. Lo anterior resulta necesario para evitar que la organización del mecanismo se desarrolle bajo un diseño metodológico insuficiente frente a los estándares constitucionales y convencionales aplicables, lo que podría comprometer la validez del propio ejercicio de consulta y, en su caso, de la legislación que de este derive.

Siendo oportuno mencionar que, **en virtud de lo manifestado por el Congreso mediante el acuerdo parlamentario multicitado, respecto de que es a través del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana como ese Congreso estatal podrá garantizar que los procesos de consulta a las personas con discapacidad y a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas se apeguen estrictamente a los parámetros constitucionales y convencionales exigidos en las ejecutorias, esto es, que se desarrollen bajo los principios de ser previas, libres, informadas, de buena fe, transparentes, accesibles y culturalmente adecuadas.**

En este sentido, este Instituto considera oportuno contribuir, desde el ámbito de sus atribuciones, a la adecuada definición y desarrollo del mecanismo correspondiente, a fin de dotarlo de certeza jurídica y de garantizar su congruencia con los estándares constitucionales y convencionales aplicables. Para ello, se estima conveniente que, de manera previa al inicio de las actuaciones correspondientes, se precise la naturaleza jurídica y el alcance de cada mecanismo, atendiendo a las particularidades de las materias legislativas involucradas, así como a los sujetos, metodología, fases, calendario, responsabilidades y recursos presupuestales que correspondan.

Resulta orientador para el presente asunto lo resuelto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Acción de Inconstitucionalidad 104/2022, en la que se establecieron criterios sobre la naturaleza y los estándares constitucionales de las consultas especializadas. En dicha resolución, se reiteró que la consulta a las personas con discapacidad constituye una formalidad esencial del procedimiento legislativo y un derecho sustantivo vinculado con su participación efectiva. En ese sentido, los criterios establecidos permiten **diferenciar las consultas previas especializadas de los mecanismos generales de participación ciudadana previstos en la legislación local,** ya que responden a estándares constitucionales específicos, atendiendo a las características de los sujetos involucrados, la materia objeto de consulta y la metodología aplicable en cada caso."

En ese sentido debe de considerarse que las disposiciones previstas en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de participación ciudadana para el Estado de Morelos relativas a los requisitos de participación efectos de los resultados y temporalidad de la consulta ciudadana no resultan automáticamente aplicables a las consultas previas especializadas, toda vez que estas últimas derivan de mandatos jurisdiccionales y deben desarrollarse conforme a los parámetros constitucionales y convencionales establecidos para garantizar los derechos de los grupos o sujetos de consulta.

**XIII. DEFINICIÓN DE LA SOLICITUD DE REALIZAR UNA CONSULTA ÚNICA.** Con la finalidad de garantizar el derecho a la consulta previa y a la participación efectiva de las personas con discapacidad, así como de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, este Consejo Estatal Electoral estima que, si bien el Acuerdo Parlamentario propone que la organización y desarrollo de ambas consultas se realice mediante una consulta única, resulta conveniente que su diseño e implementación **atiendan de manera diferenciada las particularidades de cada proceso de consulta**, pues cada uno de los procesos de consulta responde a un ordenamiento jurídico diverso y a un grupo sujeto de consulta con exigencias metodológicas propias, cuya homologación en un solo instrumento podría comprometer el cumplimiento cabal de los estándares constitucionales y convencionales exigidos en cada caso.

Si bien es cierto, como lo refiere el Congreso en su acuerdo parlamentario, respecto de que del análisis de los efectos dictados en la acción de inconstitucionalidad 71/2021 (relativa a la Ley de Educación del Estado) y la acción de inconstitucionalidad 111/2022 y su acumulada 112/2022 (relativa a la Ley para la Declaración Especial de Ausencia de Personas Desaparecidas en el Estado), de los cuales se advierte que ambas ejecutorias se imponen exactamente los mismos deberes constitucionales de participación, también es cierto que los sujetos a los cuales va dirigida son distintos, —personas con discapacidad y personas de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas— por lo tanto las consultas deberán estar adecuadas al grupo de que se trate, con la finalidad de salvaguardar y garantizar los derechos humanos de cada persona, respetando la perspectiva intercultural o en su caso eliminando barreras y realizando ajustes razonables, para garantizar que la participación sea real y libre de discriminación.

Como ya se ha mencionado, hay características diversas en cada una de las consultas, pues depende de la naturaleza de la consulta, en el caso de las personas con discapacidad que sean consultadas, su participación debe cumplir con los elementos mínimos para cumplir con la obligación establecida en el artículo 4.3 de la Convención de Personas con Discapacidad y acorde a lo establecido por la observación general número 7 (2018) del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el derecho a la consulta de las personas con discapacidad en la legislación y políticas públicas nacionales es un requisito ineludible para asegurar la pertinencia y calidad de todas las acciones encaminadas a asegurar el pleno goce de los derechos de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás. Dicho de otro modo, **la consulta es lo que asegura que las medidas dirigidas a las personas con discapacidad sean una respuesta a sus necesidades reales;** así como lo

establecido en el artículo 6° del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, que señala que se deben **establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente**, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que les conciernan, lo anterior, aunado a los fundamentos jurídicos que se han vertido a lo largo de este acuerdo.

Por otro lado, el Congreso en su acuerdo parlamentario, menciona que la realización del mecanismo de "consulta ciudadana previa" en los términos que han quedado establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación representa un esfuerzo operativo y técnico que conlleva la erogación de recursos de toda índole, y que bajo esa lógica el llevar a cabo dos procedimientos de consulta por separado para los mismos grupos de atención prioritaria duplicaría el impacto presupuestal necesario para realizarlos.

Sin embargo, no debemos pasar por alto que el artículo primero constitucional, nos obliga a observar los tratados internacionales, que salvaguardan los derechos humanos, en tal virtud, se debe considerar como lo dijo la SCJN que las consultas no son simples trámites legislativos, sino requisitos indispensables para la validez constitucional de las leyes emitidas por el Congreso.

Por lo anterior, se considera necesario que la implementación de los mecanismos de consulta se realicen atendiendo a las particularidades jurídicas y materiales que correspondan en cada caso, tomando en consideración la ejecutoria que les dé origen, el ordenamiento jurídico aplicable y las características del grupo sujeto de consulta, por lo tanto, **se considera que realizar una única consulta, podría poner en riesgo el no atender de manera adecuada los estándares mínimos indispensables que se deben seguir en cada una de las recomendaciones internacionales para llevar a cabo las consultas de las personas con discapacidad, así como de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.**

En ese sentido **se hace indispensable analizar y definir la viabilidad** de realizar una consulta para personas con discapacidad, y otra de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, ello con la finalidad de atender los ajustes que se tengan que realizar por cada uno de los grupos.

**XIV. DE LA VIABILIDAD DE LA REALIZACIÓN DE LA O LAS CONSULTAS A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y PERSONAS DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS Y AFROMEXICANAS.** Como ya se ha mencionado, la consulta solicitada por el acuerdo parlamentario

**ACUERDO/100/SSLyP/DPyTL/Año3/P.O.1/26,** deviene de las ejecutorias dictadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las acciones de inconstitucionalidad 71/2021 y 111/2022 y su acumulada 112/2022, de la cual se desprende que el mandato jurisdiccional no ordenó una consulta ciudadana en sentido amplio, sino dos consultas previas especializadas y diferenciadas; una consulta a personas con discapacidad, fundada en el artículo 4.3 de la

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y una consulta a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, fundada en el artículo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, en tal virtud, también requieren de preparación especial, en la cual se emplean recursos humanos, materiales, jurídicos y administrativos, que redundan en presupuesto para la realización de los mismos.

Ahora bien, se debe precisar que, con fecha primero de septiembre del presente año, el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana declaró el inicio del proceso electoral ordinario local 2026-2027, en el cual se elegirán a los miembros de 33 Ayuntamientos y 20 diputaciones locales, también resulta importante mencionar que IMPEPAC, en su carácter de organismo público local electoral, tiene como función esencial la organización de las elecciones locales en el estado de Morelos, en términos del artículo 41, base V, apartado C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de las disposiciones constitucionales y legales que regulan su actuación en el ámbito local.

En ese sentido, es preciso mencionar que la organización de los procesos electorales comprende el desarrollo oportuno, coordinado y eficiente de las actividades necesarias para garantizar que las elecciones se lleven a cabo conforme a los principios rectores de la función electoral, tales como el de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género. Por lo que, para cumplir con esa responsabilidad, el Instituto debe planear, distribuir y ejecutar sus recursos humanos, materiales, financieros y técnicos de acuerdo con las etapas y los plazos establecidos en la normativa electoral.

Bajo esa consideración, el inicio de la etapa de preparación del proceso electoral representa un momento institucional de especial relevancia, pues implica la ejecución simultánea de actividades estratégicas, administrativas, técnicas y logísticas que requieren una atención permanente y una coordinación eficaz entre las distintas áreas del propio instituto y con entes externos.

En consecuencia, la eventual realización de las consultas a las personas con discapacidad y a las personas de pueblos y comunidades indígenas, durante esta etapa cobra mayor relevancia al analizar que se trata de un ejercicio que, por su naturaleza, requiere una planeación específica, la identificación de las comunidades participantes, la coordinación con sus autoridades representativas, la definición de mecanismos cultural y lingüísticamente adecuados, las asociaciones representantes, los ajustes razonables, etcétera, así como la asignación de personal, presupuesto, infraestructura y tiempos suficientes para garantizar una participación efectiva.

Por lo que, es necesario mencionar que para la realización de las consultas, se requiere de **recursos humanos, materiales, financieros y técnicos**, los cuales podrán determinarse hasta en tanto, se hagan las precisiones solicitadas en los considerandos anteriores, **para poder definir cuál sería el presupuesto que se le requeriría al Congreso del estado para su materialización.**

Ahora bien, del contenido del acuerdo transcrito se advierte que el Congreso del

Estado solicita a este Instituto Electoral la implementación de mecanismo de consulta vinculado con el cumplimiento de las determinaciones emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, particularmente respecto de la participación de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, así como de personas con discapacidad.

No obstante, previo a determinar la viabilidad y, en su caso, las condiciones para la ejecución de las consultas solicitadas, resulta indispensable que el Congreso del Estado **precise y delimite el objeto, sujetos, universo de participación, alcance territorial y número de ejercicios de consulta que pretende sean realizados, toda vez que la solicitud formulada, en los términos en que fue planteada, no proporciona elementos suficientes para efectuar una adecuada planeación jurídica, técnica, presupuestal, humana y operativa.**

Sin embargo, con el ánimo de la coadyuvancia institucional, es necesario hacerle notar que, con relación a la consulta para personas con discapacidad, además de los aspectos mínimos establecidos por la SCJN, y por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; el **Congreso del Estado de Morelos debe establecer los parámetros específicos para su desarrollo, la cual no debe exigir cobertura estadística poblacional, sino: I) presencia auténtica de organizaciones de personas con discapacidad; II) diversidad geográfica suficiente; III) amplitud y robustez de la convocatoria; IV) accesibilidad procedimental; y V) incidencia efectiva de las aportaciones en la decisión pública.**

Debiendo definirse las acciones a realizar, entre las instituciones involucradas, como mínimo las siguientes:

1) Elaboración de Propuesta de Proyecto de Consulta (objeto de la Consulta, proceso participativo. Cuestionario de consulta.
2) Generar dos Mesas de Entendimiento (Trabajo) con la participación de personas con discapacidad y sus organizaciones para presentar un Anteproyecto de Protocolo para su revisión y abrir el periodo de recepción de observaciones y propuestas y la segunda mesa en la que se presente el corte con las observaciones recibidas al Anteproyecto de Protocolo para la consulta.
3) Generar dos mesas de trabajo de exploración de alternativas tecnológicas accesibles especialistas, aliados estratégicos, instituciones con experiencia en accesibilidad y proveedores de soluciones tecnológicas, con el propósito de identificar y documentar las alternativas técnicas existentes que podrían ser objeto de valoración durante la consulta y en la etapa posterior de análisis de viabilidad de la consulta.
4) Aprobación del Protocolo de Consulta (con fechas y mecanismos específicos) por la Comisión de Grupo Vulnerables y por el Pleno.
5) Convocatoria y Etapa Consultiva (Mesas Regionales, Virtuales).

Otros mecanismos de participación individual accesible (habilitación de canales de participación individual en formatos accesibles:

a. Llamadas telefónicas;

b. Videollamadas;

c. Videograbaciones;

d. Mensajes de voz y texto mediante WhatsApp;

e. Correo electrónico;

f. Documentos u oficios;

g. Cuestionario físico escaneado o en fotografías, para quienes así lo requieran.

6) Etapa de Post-Consulta (Informe de la consulta) para la consideración de la Comisión de Grupos Vulnerables y del pleno del IMPEPAC y la remisión respectiva al Congreso.

Ahora bien, en términos del artículo 4, numeral 3, de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, los Estados Parte tienen la obligación de celebrar consultas estrechas y colaborar activamente con las personas con discapacidad, incluidos las niñas y los niños con discapacidad, a través de las organizaciones que las representan, en los procesos de adopción de decisiones sobre cuestiones relacionadas con ellas.

En ese sentido, el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (IMPEPAC), en el ámbito de sus atribuciones y en observancia de los principios de igualdad, no discriminación, accesibilidad y participación efectiva, deberá prever e implementar las medidas de accesibilidad y los ajustes razonables que resulten necesarios para garantizar que las personas con discapacidad puedan participar en condiciones de igualdad en el proceso de consulta.

Lo anterior implica que la planeación y ejecución de dicho ejercicio deberán considerar las necesidades específicas de las personas con discapacidad, así como la diversidad de sus condiciones y requerimientos, mediante la adopción de medidas que permitan eliminar las barreras físicas, comunicacionales, informativas y actitudinales que pudieran obstaculizar su participación plena y efectiva.

Entre dichas medidas podrán contemplarse la utilización de formatos accesibles y de lectura fácil, la interpretación en Lengua de Señas Mexicana, la disponibilidad de información en formatos alternativos, la adecuación de los espacios físicos, el establecimiento de mecanismos accesibles para la recepción de opiniones y propuestas, así como las demás medidas que resulten pertinentes conforme a las necesidades identificadas, procurando en todo momento la participación directa de las personas con discapacidad y de las organizaciones que las representan.

Por tanto, el IMPEPAC deberá realizar los ajustes razonables y adoptar las medidas de accesibilidad que correspondan, a partir de un diálogo directo con las personas con discapacidad y sus organizaciones representativas, de manera que el diseño metodológico, los mecanismos de convocatoria, las modalidades de participación y las etapas de la consulta respondan a sus necesidades y garanticen que sus opiniones sean recibidas, consideradas y valoradas efectivamente.

De manera enunciativa, mas no limitativa, se señalan algunos de los requerimientos mínimos:

- En todas las actividades con personas con discapacidad debe haber intérprete de lengua de señas mexicana.

- Generar videos cortos y de audio durante todas las etapas del proceso de consulta.

- Generar la logística de 5 mesas regionales en su caso (o las que considere/mandate el Congreso) en todo el estado para la realización de la misma (Rentas de lugares, espacios accesibles, etc.).

- En su caso elaborar tablillas en braille con el cuestionario relativo a la consulta.

En consecuencia, la organización de la consulta deberá desarrollarse bajo un enfoque de derechos humanos, asegurando que las condiciones operativas, presupuestales y logísticas se planifiquen de manera compatible con el deber de garantizar una participación accesible, inclusiva y efectiva, sin que las dificultades administrativas se traduzcan en barreras injustificadas para el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad.

**Por cuanto a la consulta de las personas de los pueblos y comunidades indígenas.**

En primer término, resulta necesario que se precise cuál será la naturaleza de pueblos y comunidades que deberán ser considerados como sujetos titulares del derecho a la consulta, así como el instrumento o fuente oficial que habrá de utilizarse para su identificación.

Lo anterior reviste particular importancia, toda vez que este Instituto cuenta con un Catálogo de Pueblos y Comunidades Indígenas que ha servido como referente institucional para la implementación de diversos mecanismos de participación y consultas realizadas con anterioridad.

Sin embargo, debe advertirse que en ejercicios previos relacionados con las acciones afirmativas en materia político-electoral, las convocatorias emitidas por este Instituto contemplaron la participación de comunidades que se autoadscribieron como indígenas, aun cuando no necesariamente se encontraban incorporadas al catálogo institucional correspondiente. Dichas convocatorias tuvieron un carácter informativo y de apertura a la participación, sin que el catálogo constituyera, por sí mismo, una restricción absoluta de acceso a los procesos consultivos.

En consecuencia, no resulta jurídicamente ni operativamente conveniente que este Instituto determine unilateralmente el universo de comunidades que deberán ser consultadas, sin que previamente exista una definición expresa por parte de la autoridad solicitante respecto de si:

a) la consulta deberá realizarse exclusivamente con las comunidades indígenas que integran el catálogo vigente de este Instituto;

b) deberán incorporarse comunidades adicionales que se identifiquen por otros instrumentos oficiales;

c) deberá atenderse algún catálogo elaborado o reconocido por una autoridad federal o estatal distinta; o

d) deberá establecerse un mecanismo de identificación y acreditación de comunidades que, sin encontrarse actualmente incorporadas al catálogo institucional, soliciten participar en el proceso de consulta.

Esta definición resulta indispensable, pues el número de comunidades que integren el universo consultable tendrá una incidencia directa en la metodología, logística, personal requerido, materiales de difusión, traducción e interpretación, desplazamientos, sedes, tiempos de ejecución y presupuesto necesario.

Por ello, se estima necesario que el Congreso del Estado determine expresamente el catálogo, padrón, registro o fuente de información que deberá ser utilizado como base para identificar a las comunidades destinatarias de las consultas, así como los criterios para la eventual incorporación de comunidades que no se encuentren comprendidas en dicho instrumento.

De igual manera, deberá precisarse cuántas comunidades deberán ser consultadas y cuál será el alcance territorial de los ejercicios respectivos.

Lo anterior, porque no constituye la misma carga operativa realizar un proceso consultivo mediante sedes regionales que implementar ejercicios individualizados en cada una de las comunidades que integren el universo determinado.

Como antecedente, para la consulta relacionada con las acciones afirmativas implementadas por este instituto para garantizar el derecho de representación político-electoral de los pueblos y comunidades indígenas, se establece una organización que se dividió en **6 regiones** quedando de la siguiente manera:

1. **Amayuca, Jantetelco. (Zacualpan, Temoac, Jonacatepec, Jantetelco, Tepalcingo y Axochiapan)**
2. **Cuernavaca. (Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Huitzilac y Temixco)**
3. **Yautepec. (Yautepec, Atlatlahucan, Tepoztlán, Tlayacapan, Tlalnepantla, Totolapan)**
4. **Xochitepec. (Coatetelco, Coatlán del Río, Mazatepec, Miacatlán, Tetecala, Xochitepec)**
5. **Jojutla. (Amacuzac, Jojutla, Puente de Ixtla, Tlaltizapán, Tlaquiltenango, Xoxocotla)**
6. **Cuautla. (Ayala, Cuautla, Hueyapan, Ocuituco, Tetela del Volcán y Yecapixtla)**

Dicha metodología permitió concentrar esfuerzos institucionales, personal, materiales y recursos logísticos; sin embargo, su eventual utilización para las

consultas actualmente solicitadas no puede presumirse ni determinarse de manera unilateral, puesto que dependerá del universo de sujetos que finalmente sea definido, de la materia específica de cada consulta, de las características de las comunidades participantes y de la metodología que corresponda aplicar.

Por tanto, resulta necesario que el Congreso del Estado precise si pretende:

- Realizar una consulta por cada comunidad que integre el universo determinado;
- Establecer sedes regionales para la participación de diversas comunidades;
- Realizar ejercicios diferenciados por cada una de las materias objeto de consulta; o
- Implementar una metodología distinta que permita garantizar la participación efectiva de los sujetos titulares del derecho.

En este sentido, el número de comunidades y el número de consultas o ejercicios participativos que deberán desarrollarse constituye un elemento esencial para determinar la viabilidad material, presupuestal y temporal de la solicitud.

Debe destacarse que la realización de un proceso de consulta indígena no constituye una actividad aislada o de ejecución inmediata, sino un procedimiento que requiere de planeación, preparación, difusión, coordinación interinstitucional, capacitación, traslado de personal, elaboración de materiales, interpretación y traducción, instalación de sedes, documentación de las etapas y sistematización de resultados, entre otras actividades.

Como antecedente, para la realización de la consulta relacionada con las acciones afirmativas en materia político-electoral, participaron diversas áreas de este Instituto, coordinadas por la Comisión Ejecutiva Temporal de Asuntos Indígenas, entre ellas las Consejerías Electorales, la Secretaría Ejecutiva, las Direcciones Ejecutivas de Administración y Financiamiento, Capacitación Electoral, Educación Cívica y Participación Ciudadana, Organización y Partidos Políticos, la Dirección Jurídica, así como las áreas de Medios, Sistemas, Soporte Técnico y Diseño.

Asimismo, fue necesario contar con una lista adicional de 22 personas, destinada a mantener contacto directo y permanente con las comunidades participantes durante el desarrollo de las actividades consultivas.

Lo anterior evidencia que la ejecución de un proceso de esta naturaleza requiere de una estructura humana adicional a la lista ordinaria del Instituto, particularmente cuando deben desarrollarse actividades simultáneas en diversos puntos del territorio estatal.

De igual manera, para la realización de la consulta referida fue necesario gestionar recursos presupuestales adicionales. Mediante Acuerdo IMPEPAC/CEE/186/2022, se solicitó al Gobierno del Estado una ampliación presupuestal por la cantidad de $4,450,766.06 (cuatro millones cuatrocientos cincuenta mil setecientos sesenta y seis pesos 06/100 M.N.), destinada al cumplimiento de las obligaciones derivadas de la sentencia correspondiente.

Este antecedente permite advertir que la implementación de una consulta de alcance estatal implica necesariamente la previsión y disponibilidad de recursos financieros suficientes, sin que resulte jurídicamente adecuado asumir que los recursos ordinarios actualmente asignados al Instituto son suficientes para atender una obligación extraordinaria de esta naturaleza.

Asimismo, deberá contemplarse la elaboración y distribución de materiales necesarios para garantizar que la información relativa a las consultas sea accesible para las comunidades destinatarias, atendiendo a sus características lingüísticas y culturales. Entre otros insumos, deberán considerarse carteles, dípticos, folletos, lonas y demás materiales informativos, así como, en su caso, los servicios de traducción e interpretación que resulten necesarios en las lenguas identificadas en los ejercicios anteriores, entre ellas náhuatl, mixteco, tlapaneco y zapoteco, sin perjuicio de las que correspondan conforme al universo de comunidades finalmente determinado.

De igual manera, en ejercicios anteriores este Instituto ha recurrido al servicio de perifoneo como mecanismo complementario de difusión, mediante la contratación de empresas especializadas que realizan recorridos en las comunidades.

Como referencia, para la consulta sobre acciones afirmativas, el servicio de perifoneo se llevó a cabo del 3 de noviembre al 14 de diciembre de 2022, durante ocho horas diarias en diversas zonas del estado, con un costo de $86,860.80 (ochenta y seis mil ochocientos sesenta pesos 80/100 M.N.), IVA incluido.

En consecuencia, el costo de las actividades de difusión y comunicación dependerá directamente del número de comunidades, extensión territorial, duración de la consulta, número de etapas y características lingüísticas del universo que deba ser atendido.

En virtud de lo anteriormente expuesto, debe señalarse que actualmente este Instituto no cuenta con los elementos económicos, financieros, humanos, materiales y operativos suficientes para ejecutar de manera inmediata las consultas solicitadas en los términos planteados por el Congreso del Estado.

Lo anterior no implica una negativa a atender las obligaciones que, en su caso, correspondan a este organismo electoral, sino la necesidad de que cualquier eventual ejecución se encuentre precedida de una planeación integral y de la provisión de los recursos necesarios, a efecto de garantizar que el procedimiento se desarrolle de manera adecuada y con observancia de los principios constitucionales y legales que rigen la función electoral.

En particular, la solicitud formulada no permite determinar, a la fecha, el impacto presupuestal correspondiente, debido a que aún no se encuentran definidos elementos indispensables como:

- El catálogo, padrón o fuente oficial determinará el universo de comunidades sujetas a consulta.
- El número total de comunidades que deberán participar.
- El número de consultas o ejercicios participativos que deberán realizarse.
- La metodología y modalidad de participación que habrá de implementarse.
- El alcance territorial y número de sedes requeridas.

- La duración y calendario de cada una de las etapas del proceso consultivo.
- Los requerimientos de traducción, interpretación y materiales de difusión.
- La necesidad de contratación de personal eventual o especializado.
- Los recursos materiales, tecnológicos, logísticos y de transporte necesarios.
- El presupuesto adicional que, en su caso, deberá gestionarse ante las autoridades competentes.

Por tanto, no resulta posible realizar en este momento una estimación presupuestal definitiva ni comprometer la ejecución inmediata de las consultas, puesto que cualquier cálculo dependería necesariamente de la definición previa de los elementos antes señalados.

Aunado a lo anterior, debe considerarse que este Instituto Electoral se encuentra actualmente atendiendo las actividades inherentes al Proceso Electoral Local Ordinario 2026-2027, circunstancia que representa una carga institucional extraordinaria y que limita material y operativamente la posibilidad de ejecutar de manera inmediata y simultánea un proceso consultivo de alcance estatal que requiera la participación de diversas áreas, personal especializado, recursos materiales y despliegue territorial.

La eventual ejecución simultánea de ambas responsabilidades institucionales deberá ser objeto de una planeación cuidadosa, a fin de evitar afectaciones a las actividades sustantivas del proceso electoral y garantizar en todo momento la observancia de los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad, profesionalismo, máxima publicidad y eficacia que rigen la función electoral.

En consecuencia, previo a que este Instituto Electoral pueda pronunciarse respecto de la viabilidad material, técnica, presupuestal y operativa de las consultas solicitadas, resulta indispensable que el Congreso del Estado de Morelos proporcione y precise la información necesaria para delimitar el alcance de la solicitud.

En particular, deberá determinarse de manera expresa:

a) El catálogo, padrón o instrumento oficial que habrá de utilizarse para identificar a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas que serán sujetos de consulta;

b) El universo concreto de personas, pueblos, comunidades y, en su caso, organizaciones o autoridades que deberán participar;

c) El número de comunidades que deberán ser consultadas;

d) El número de consultas o ejercicios participativos que se pretende realizar respecto de cada una de las materias señaladas en el Acuerdo Parlamentario;

e) Si la consulta habrá de realizarse de manera individual por comunidad o mediante un esquema de sedes regionales;

f) El alcance territorial, metodología y etapas que se pretenden implementar; y

g) El plazo dentro del cual se pretende que sean desarrolladas las

consultas.

Una vez que se cuente con dicha información, este Instituto estará en posibilidad de realizar un diagnóstico técnico, jurídico, presupuestal, humano y operativo, que permita determinar los recursos necesarios, la metodología aplicable, los requerimientos de personal, materiales, traducción e interpretación, logística, difusión, transporte y demás insumos indispensables para garantizar la adecuada ejecución del proceso consultivo.

En ese sentido, debe quedar establecido que la definición del universo de sujetos y del número de comunidades a consultar constituye una condición previa e indispensable para determinar la viabilidad de las consultas y cuantificar los recursos necesarios para su realización. Por lo anterior, y **atendiendo a que este Instituto no dispone actualmente de suficiencia presupuestal, financiera, humana, material y operativa para ejecutar de manera inmediata las consultas solicitadas, resulta necesario que, previamente a cualquier determinación sobre su implementación, el Congreso del Estado precise el alcance de su solicitud y proporcione los elementos necesarios para realizar la planeación correspondiente, sin perjuicio de que, una vez determinado el alcance de las consultas, se lleven a cabo las gestiones presupuestales, administrativas y de coordinación interinstitucional que resulten necesarias.**

Todo ello deberá realizarse tomando en consideración las cargas institucionales derivadas del Proceso Electoral Local Ordinario 2026-2027, a efecto de establecer un calendario y una metodología que permitan atender las obligaciones correspondientes sin comprometer el adecuado desarrollo de las funciones constitucionales y legales encomendadas a este organismo electoral.

## XV. VINCULACIÓN REALIZADA POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN RELATIVO A LA PARTICIPACIÓN DEL IMPEPAC EN LA CONSULTA SOLICITADA POR EL CONGRESO DEL ESTADO.

Con fecha veintiocho de septiembre de dos mil veintiséis, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en autos de la acción de inconstitucionalidad 71/2021, determinó vincular a este IMPEPAC, al cumplimiento de la ejecutoria del expediente de mérito, en los términos siguientes:

> [...]
> **II. Vinculación.**
>
> Derivado de lo informado por el delegado de dicho Congreso estatal y toda vez que las sentencias dictadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación son de orden público y su cumplimiento constituye una obligación para las autoridades que conforme a sus atribuciones tengan intervención en los actos encaminados a su ejecución, **se vincula al cumplimiento de la ejecutoria al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana del Estado de Morelos,** para que dentro del ámbito de sus atribuciones, en la plazo de **diez días hábiles**, informe las acciones que haya realizado o se encuentre realizando que guarden relación con el cumplimiento de la ejecutoria, **relativo al desarrollo de las**

**consultas a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, así como de las personas con discapacidad.**
[...]

Sin embargo, dicha vinculación se realiza atendiendo a que las sentencias dictadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, son de orden público y su cumplimiento constituye una obligación para las autoridades que conforme a sus atribuciones tengan intervención en los actos encaminados a su ejecución.

La vinculación del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana al cumplimiento de la sentencia, no implica, por sí misma, que adquiera el carácter de autoridad responsable directa ni que asuma la totalidad del procedimiento de la consulta a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos así como a las personas con discapacidad. Dicha vinculación debe entenderse en función de los efectos y alcances concretos de la determinación judicial, así como de las atribuciones que legalmente corresponden al Instituto.

Por tanto, resulta necesario delimitar las actividades de apoyo técnico, operativo o metodológico que debe desarrollar el Instituto, distinguiéndolas de las decisiones sustantivas y de las obligaciones que competen a la autoridad responsable de la consulta, a fin de garantizar el cumplimiento de la resolución judicial y el respeto al marco constitucional y legal aplicable.

Por lo anterior, es que este Consejo Estatal Electoral considera necesario definir la participación de este Instituto en la realización de las consultas solicitadas por el Congreso Local, a efecto de delimitar sus funciones y garantizar que las consultas se lleven a cabo de forma ordenada garantizando el derecho de participación de la ciudadanía que concurra en ellas.

En este orden, este órgano colegiado estima que el IMPEPAC debe actuar como **un órgano auxiliar** en la realización de las consultas materia de la presente determinación, para coadyuvar con el Congreso del Estado de Morelos, ello porque como se reconoció por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el acuerdo dictado el día trece de agosto del año dos mil veintiséis, en autos de la acción de inconstitucionalidad 111/2022 y su acumulada 112/2022, aunque este Instituto cuenta con atribuciones relacionadas con el desarrollo de la consulta ciudadana, **de la propia normatividad se advierte que corresponde al Congreso del Estado de Morelos iniciar el proceso respectivo.**

Conviene señalar como antecedente, que en la *Consulta previa, libre, mediante procedimientos culturalmente adecuados, informada y de buena fe respecto a la creación del municipio de Tetelcingo, Morelos*, el IMPEPAC fungió como **órgano auxiliar**[2] y el Congreso del Estado de Morelos el **órgano responsable**, además, se precisa que dicha consulta se llevó a cabo por la solicitud del Congreso del Estado quien estaba vinculado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la controversia constitucional 30/2018, y solicitó a este Instituto su participación en la consulta a través del acuerdo parlamentario ACUERDO/070/SSLYP/AÑO1/P.0.2/22.

[2] https://old.impepac.mx/consulta-a-la-comunidad-de-tetelcingo-para-la-creacion-del-municipio/

En consecuencia, para efectos de las consultas materia del presente acuerdo, la participación del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana en el proceso de consulta indígena, en su carácter de **órgano auxiliar,** tendrá como finalidad brindar el apoyo técnico, operativo, logístico y metodológico que, dentro del ámbito de sus atribuciones legales y conforme a los acuerdos que se adopten con la autoridad responsable, resulte necesario para el adecuado desarrollo de las actividades que integren dicho procedimiento.

La intervención del IMPEPAC deberá circunscribirse a las funciones expresamente acordadas y jurídicamente procedentes, sin que su carácter auxiliar implique asumir facultades que correspondan exclusivamente a la autoridad responsable, sustituir a las autoridades representativas de los pueblos y comunidades indígenas o limitar la participación de estos en la definición de las condiciones y metodología de la consulta.

En consecuencia, la autoridad responsable conservará las obligaciones y determinaciones que legalmente le correspondan respecto de la consulta, mientras que el IMPEPAC desarrollará las actividades de apoyo que le sean encomendadas, bajo los principios de coordinación institucional, legalidad, interculturalidad, máxima participación y respeto a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas.

Lo anterior, no implica desconocer las atribuciones que conforme a la Ley le corresponden a este Instituto ni limitar su actuar en aquellas actividades que se encuentren comprendidas dentro de su ámbito de competencia.

Por lo anterior, este Consejo Estatal Electoral considera que la participación del IMPEPAC en la celebración de las consultas debe ser como un **órgano auxiliar**.

Debe enfatizarse que la presente determinación no constituye, en ninguna circunstancia, una evasiva o negativa de este Instituto Electoral para dar cumplimiento a lo mandatado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el acuerdo de vinculación dictado el veintiocho de septiembre de dos mil veintiséis en los autos de la Acción de Inconstitucionalidad 71/2021. Por el contrario, este órgano comicial refrenda su indeclinable compromiso constitucional con la garantía y protección de los derechos humanos de las personas con discapacidad, así como de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.

Sin embargo, con el propósito de tutelar los principios rectores de certeza, legalidad y máxima publicidad que rigen la función electoral, y a efecto de evitar la instrumentación de procedimientos viciados que pudieran comprometer la validez formal y material de las futuras reformas legislativas, este Instituto determina que la coadyuvancia técnica requerida exige indispensablemente la definición previa, por parte del Congreso del Estado de Morelos, de los parámetros, universo, metodología y suficiencia presupuestal indispensables; asegurando al mismo tiempo el desarrollo eficiente del Proceso Electoral Local Ordinario 2026-2027 actualmente en curso.

## XVI. ELEMENTOS QUE EL CONGRESO LOCAL DEBE SEÑALAR A ESTE INSTITUTO, PARA QUE REALICE LAS GESTIONES ENCAMINADAS A LA MATERIALIZACIÓN DE LAS CONSULTAS SOLICITADAS

Con el fin de dar cumplimiento a lo solicitado por el Congreso del Estado de Morelos a través del acuerdo parlamentario **ACUERDO/100/SSLyP/DPyTL/Año3/P.O.1/26** y en relación con los puntos que se han expuesto en los considerandos del presente acuerdo, este Consejo Estatal Electoral considera necesario que el Legislativo informe a este Instituto y defina los siguientes elementos mínimos que se requieren para llevar a cabo las consultas, dichos elementos mínimos son necesarios para la instrumentación de las consultas:

- Señalar con claridad el curso que deberán seguir las consultas ciudadanas debido a que como se desarrolló en los antecedentes las consultas ordenadas en las ejecutorias dictadas en las acciones de inconstitucionalidad 71/2021 y 111/2022 y su acumulada 112/2022 no corresponden a mecanismos que deriven de las reglas de participación ciudadana de los cuales existen reglas específicas para el caso de las consultas a las comunidades indígenas, por tanto el Congreso Local deberá definir las **etapas que corresponden a dicha consulta, sujetos involucrados, metodología, calendario de actividades, responsabilidades institucionales y presupuesto correspondiente**.
- Determinar que las consultas sobre **pueblos y comunidades indígenas** y las de **personas con discapacidad** se realizarán de **manera diferenciada**, ya que como se desarrolló en la parte considerativa del presente acuerdo cada consulta corresponde a grupos diferenciados cuyos derechos político electorales en materia de participación ciudadana se deben proteger específicamente con el fin de no vulnerar sus derechos fundamentales, por ello el Congreso Local debe precisar que cada consulta se llevará a cabo de manera diferenciada.
- **Definir qué comunidades participarán en la consulta**, pudiendo señalar que serán las que están incluidas en el catálogo de pueblos y comunidades indígenas con el que cuenta este Instituto o el que emana del Congreso del Estado de Morelos, incluso determinar un catálogo distinto a los señalados, del mismo modo determinar qué **grupos de personas con discapacidad** contemplará la consulta.
- Considerar la **viabilidad, técnica, operativa y presupuestal** con la que **no** cuenta este Instituto para la realización de las actividades inherentes a las consultas, considerando que actualmente este Instituto se encuentra realizando actividades propias del proceso electoral local ordinario 2026-2027 en la Entidad, por lo que el Congreso Local deberá considerar estos elementos para la proyección de actividades que tendrá a su cargo este Instituto como órgano auxiliar.
- **Definir la participación del IMPEPAC**, en la celebración de ambas consultas debido a que como se razonó en la parte considerativa de la presente determinación, este Instituto debería coadyuvar con el carácter de **órgano auxiliar** en la celebración de las consultas.
- Por lo anterior, los elementos mínimos requeridos constituyen una base para que el Congreso Local determine los términos, características y alcances bajo los cuales deberá de instrumentarse las consultas, a partir de dicha definición este Instituto estará en posibilidad de elaborar la proyección correspondiente y en su caso, desarrollar las actividades de apoyo que resulten procedentes dentro del ámbito de sus atribuciones, por lo cual con el fin de atender el acuerdo **ACUERDO/100/SSLyP/DPyTL/Año3/P.O.1/26**,,

este órgano electoral deberá contar con la información que remita el Congreso Local atendiendo los elementos precisados.

- Se exhorta respetuosamente al Congreso del Estado de Morelos para que, en el ámbito de sus atribuciones, considere incorporar mecanismos específicos, accesibles e inclusivos que garanticen la participación efectiva de niñas, niños y adolescentes con discapacidad en los procesos de consulta pública, particularmente en aquellos relacionados con la Ley de Educación del Estado de Morelos.
- **Finalmente,** este Consejo Estatal Electoral determina que una vez que se hayan realizado todas las aclaraciones solicitadas al Congreso del Estado y se cuenten con los elementos necesarios para realizar las proyecciones reales de los requerimientos para darle cumplimiento a la materialización de las consultas correspondientes, se estará en posibilidades de proyectar el presupuesto que se le va a requerir al Congreso del Estado de Morelos, a fin de darle cumplimiento a las sentencias de mérito.

Ahora bien, este Consejo Estatal Electoral considera que, una vez determinado dar el debido seguimiento a lo solicitado mediante el Acuerdo Parlamentario identificado con el **alfanumérico ACUERDO/100/SSLyP/DPyTL/Año3/P.O.1/26**, y en atención a lo establecido en la parte considerativa del presente Acuerdo, resulta necesario establecer mecanismos de coordinación y comunicación institucional con el Poder Legislativo del Estado de Morelos, a efecto de dar seguimiento a las actividades necesarias para la realización de las consultas previas, en cumplimiento de lo ordenado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en **las Acciones de Inconstitucionalidad 71/2021 y 111/2022 y su acumulada 112/2022.**

En ese sentido, y con la finalidad de facilitar la coordinación interinstitucional, el intercambio de información y el seguimiento oportuno de las acciones que, en el ámbito de sus respectivas competencias, correspondan a las instituciones involucradas, respetuosamente se solicita al Congreso del Estado de Morelos tenga a bien designar a una persona servidora pública que funja como enlace institucional con este órgano electoral local.

Lo anterior, con el objeto de establecer un canal formal y permanente de comunicación que permita coordinar y dar seguimiento a las actividades, acciones y trabajos necesarios para la debida atención del Acuerdo Parlamentario de referencia y, particularmente, para la realización de las consultas previas relacionadas con el cumplimiento de las determinaciones emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las acciones de inconstitucionalidad antes señaladas.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, en términos de lo señalado en su conjunto por los artículos 2, apartado A, 41, segundo párrafo, base V, apartado A, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6 y 7 del Convenio (No. 169) Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes; 23, párrafo séptimo, fracción V, de la Constitución para el Estado Libre y Soberano de Morelos; 63, párrafo tercero, 65, 66, fracción V, 69, 78, fracciones I, III, XLIV y LV, 83 fracciones XII y XIII, 84, párrafo primero, 88 Bis, 91 Ter, 91 Quáter del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos; este Consejo Estatal Electoral; emite el siguiente:

A C U E R D O

**PRIMERO.** Este Consejo Estatal Electoral, es **competente** para emitir el presente acuerdo, de conformidad con los fundamentos y consideraciones expuestos en el mismo.

**SEGUNDO.** Se **aprueba** la respuesta al Acuerdo Parlamentario identificado con el alfanumérico **ACUERDO/100/SSLyP/DPyTL/Año3/P.O.1/26,** emitido por el Congreso del Estado de Morelos, respecto de la realización de las consultas previas ordenadas en las acciones de inconstitucionalidad 71/2021 y 111/2022 y su acumulada 112/2022, en los términos expuestos en la parte considerativa de la presente determinación, precisando que la participación de este Instituto se desarrollará en el ámbito de sus atribuciones, en coordinación y coadyuvancia con el Congreso del Estado, sin sustituir las responsabilidades que a este último le corresponden en el cumplimiento de las respectivas ejecutorias.

**TERCERO.** Se solicita al Congreso del Estado de Morelos que, a efecto de establecer las condiciones jurídicas, técnicas, metodológicas, presupuestales y operativas necesarias para la adecuada instrumentación de las consultas, precise y proporcione a este Instituto la información siguiente:

**I. Objeto y alcance:** Las materias legislativas que serán sometidas a consulta, distinguiendo aquellas que corresponden a cada una de las ejecutorias y los grupos destinatarios de los respectivos ejercicios consultivos.

**II. Sujetos de consulta:** El universo de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, así como de personas con discapacidad y sus organizaciones representativas, que deberán participar, precisando los instrumentos o criterios que permitan su identificación, sin establecer restricciones injustificadas al ejercicio del derecho a la consulta.

**III. Número y modalidad de las consultas**: La cantidad de ejercicios consultivos que se pretende desarrollar, su alcance territorial y las modalidades de participación propuestas, precisando si se realizarán por comunidad, mediante sedes regionales o a través de otros mecanismos que garanticen una participación efectiva y diferenciada.

**IV. Metodología**: Los criterios iniciales, etapas y mecanismos propuestos para el desarrollo de las consultas, considerando que su definición deberá garantizar la intervención efectiva de las personas, pueblos y comunidades destinatarias, conforme a los estándares constitucionales y convencionales aplicables.

**V. Temporalidad:** El calendario y los plazos estimados para el desarrollo de las consultas, considerando las actividades institucionales que este organismo electoral desarrolla con motivo del Proceso Electoral Local Ordinario 2026-2027.

**VI. Responsabilidades y recursos:** La delimitación de las actividades que corresponderán al Congreso del Estado y aquellas para las que se solicita la

colaboración de este Instituto, así como los mecanismos para gestionar y garantizar la disponibilidad de los recursos humanos, materiales, técnicos y financieros que resulten necesarios.

**CUARTO.** Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que, una vez que se cuente con la información necesaria por parte del Congreso del Estado, elabore y someta a consideración de este Consejo Estatal Electoral el diagnóstico técnico, jurídico, presupuestal y operativo correspondiente, así como la propuesta de actividades de colaboración que, en su caso, resulten procedentes.

**QUINTO.** Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que remita copia certificada del presente acuerdo al Congreso del Estado de Morelos, a efecto de hacer de su conocimiento la determinación adoptada por este órgano colegiado y solicitar formalmente la información y precisiones señaladas en el punto resolutivo TERCERO.

**SEXTO.** Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que, en atención a la vinculación realizada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en autos de la acción de inconstitucionalidad 71/2021, rinda el informe correspondiente dentro del plazo judicial aplicable, acompañando al mismo copia certificada del presente acuerdo así como del oficio mediante el cual se remita la respuesta formal a la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos a efecto de acreditar de manera fehaciente ante el máximo Tribunal del país las acciones de coadyuvancia institucional y técnica desplegadas por este organismo electoral.

**SÉPTIMO.** Se exhorta a las instancias legislativas competentes a establecer, en la metodología, convocatoria y protocolo de consulta, mecanismos específicos que permitan la participación de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, considerando su edad, grado de desarrollo, autonomía progresiva, necesidades de apoyo, accesibilidad y formas de comunicación.

**OCTAVO.** Publíquese el presente acuerdo en la página oficial de internet del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, en atención al principio de máxima publicidad.

El presente acuerdo es aprobado por **unanimidad** de las Consejeras y los Consejeros Electorales, en sesión extraordinaria del Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, celebrada en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, el día quince de octubre del año dos mil veintiséis, siendo las trece horas con treinta y nueve minutos.

**MTRA. MIREYA GALLY JORDÁ**
**CONSEJERA PRESIDENTA**

**MTRA. MÓNICA SÁNCHEZ LUNA**
**SECRETARIA EJECUTIVA**

## CONSEJERÍAS ELECTORALES

MTRA. ELIZABETH MARTÍNEZ GUTIÉRREZ
CONSEJERA ELECTORAL

MTRA. MAYTE CASALEZ CAMPOS
CONSEJERA ELECTORAL

MTRA. MARÍA DEL ROSARIO MONTES ÁLVAREZ
CONSEJERA ELECTORAL

MTRO. ADRIÁN MONTESSORO CASTILLO
CONSEJERO ELECTORAL

ING. VÍCTOR MANUEL SALGADO MARTÍNEZ
CONSEJERO ELECTORAL

## REPRESENTACIONES DE PARTIDOS

LIC. LAURA ELVIRA JIMÉNEZ SÁNCHEZ
REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO

LIC. ALBERTO ALEXANDER ESQUIVEL OCAMPO
REPRESENTANTE DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDA

LIC. OMAR DAMIÁN GONZÁLEZ
REPRESENTANTE DEL PARTIDO MORENA

LIC. OSCAR JIRAM VÁZQUEZ ESQUIVEL
REPRESENTANTE DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA MORELOS

LIC. GEORGINA GUADALUPE LIMA CASAS
REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA MORELOS

C. JESÚS MARTÍNEZ DORANTES
REPRESENTANTE DEL PARTIDO PAZ

C. CELSO MARIO HERNÁNDEZ BARAJAS
REPRESENTANTE DEL PARTIDO SOMOS

C. DIANA LAURA NAVA VERDEJO
REPRESENTANTE DEL PARTIDO BIEN CIUDADANO